MENTALIDAD TRADICIONAL, REFORMISMO ILUSTRADO Y EDUCACION CLERICAL: EL COLEGIO DE LA PURISIMA DE LORCA (1779-1820)

Cayetano MAS GALVÁN

Universidad de Alicante

INTRODUCCION

La renovada importancia cobrada a lo largo del Setecientos español por el fenómeno educativo, en todas sus facetas, tuvo igualmente en Murcia y su diócesis un amplio reflejo. Y ello no sólo en las diferentes ramas y niveles de la enseñanza, sino también en relación a la actuación de los distintos agentes sociales (capaces de adoptar iniciativas en este ámbito) y a la diversidad de planteamientos culturales e ideológicos —no siempre coincidentes— empleados en la puesta en marcha o en el desarrollo de tales actuaciones.

Sin considerar aquí las iniciativas adoptadas en los niveles básicos de la enseñanza, o por instituciones de carácter esencialmente laico (v.gr., las enseñanzas de primeras letras; las establecidas por los municipios, o por la Real Sociedad Económica de Amigos del País)¹, centraremos el presente trabajo en torno a los problemas planteados por la formación del clero secular diocesano, y más en concreto, a partir del ejemplo que proporciona el Colegio de la Purísima Concepción de la ciudad de Lorca.

1 Sin pretender ser exhaustivos, sobre estos particulares pueden verse los trabajos de PEÑAFIEL RAMON, Antonio, "En torno a la situación de los maestros de primeras letras en Murcia a mediados del siglo XVIII", *Monteagudo* (Murcia), 1983, pp. 23-30; RUIZ ALEMAN, Joaquín, "La Sociedad Económica murciana y su preocupación por la enseñanza", *Anales de la Universidad de Murcia. Letras*, vol. XLI, 3-4, (1982-1983), pp. 27-42; BALLESTA PAGAN, Francisco Javier, *La Educación en la Sociedad Económica de Amigos del País de Murcia (1777-1808)*, Murcia, 1985; VELAZQUEZ MARTINEZ, Matías, "La génesis de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Murcia", *Homenatge al doctor Sebastià García Martínez*, València, 1988, t. III, pp. 85-96; VIÑAO FRAGO, Antonio, "El proceso de alfabetización en el municipio de Murcia (1759-1860)", *La Ilustración española*, Alicante, 1986, pp. 235-250; VIÑAO, A. (Ed.), *Historia y educación en Murcia*, 1983; y la tesis doctoral inédita de VICENTE GUILLEN, Antonio, *Instituciones educativas en Murcia en el siglo XVIII*, Universidad de Murcia, Fac. Filosofía y Letras, 1973. Sobre Lorca, debe consultarse el trabajo de MORENO MARTINEZ, Pedro, "Notas para una sociología de la lectura en Lorca (1760-1815)", *La Ilustración española*, Alicante, 1986, pp. 251-267.

Al abordar estas cuestiones, desde una perspectiva amplia que nos permita enfocar adecuadamente el caso que nos ocupa, debemos señalar dos hechos básicos.

En virtud del primero de ellos, también en este campo —como en los otros mencionados— se produjo un fenómeno de extensión puramente cuantitativa (número de instituciones y de efectivos humanos) que sin duda ha de relacionarse con la mejora de las condiciones económicas experimentada a lo largo del Setecientos murciano ². Ahora bien, tal mejora no debe entenderse sólo en el sentido —aunque cierto, difícilmente mensurable— de puro incremento de la demanda, sino sobre todo de ampliación de la oferta educativa organizada por la propia Iglesia murciana. Y ello porque esta ampliación no siempre tuvo precisamente como fin prioritario o exclusivo —el caso que nos ocupa puede proporcionar un ejemplo— servir a la potencial demanda: no es raro que este último propósito se muestre en ocasiones como complementario o como mera justificación para otros objetivos.

El segundo hecho al que nos referimos viene representado por la estrecha vinculación —mayor si cabe que en otras áreas— que en el ámbito murciano tendrá la formación del clero con el resto de los niveles de la educación superior. Elemento determinante aquí fue la ausencia, durante toda la Modernidad, de una Universidad en Murcia. Dicho en otras palabras, la formación de la elite profesional (sobre todo en los estudios de teología y ambos derechos) e intelectual murciana del Setecientos careció de un organismo civil que la encauzase adecuadamente.

La total ausencia de estructuras educativas estatales, y la poquedad de las actuaciones municipales, dejaron expedito el camino para que, en ese contexto de bonanza económica setecentista, fuese la Iglesia murciana quien asumiera —a veces en grandes operaciones donde el componente representado por el aumento del prestigio y del protagonismo social no era en absoluto desdeñable— la responsabilidad de dar respuesta a la demanda educativa superior (eclesiástica o no) e incluso de intentar llevar adelante el proyecto universitario ³.

Ahora bien, la carencia de estructuras estatales y el papel secundario desempeñado por los municipios no implica en absoluto que éstos y el propio Estado permanecieran indiferentes o ausentes en los niveles educativos referidos. De hecho, la presencia estatal se dejó sentir con fuerza, por distintas vías, durante las tres últimas décadas del

2 Sobre las características y sentido de este proceso, *vid.* PEREZ PICAZO, María Teresa y LEMEUNIER, Guy: *El proceso de modernización de la región murciana (siglos XVI-XIX)*, Murcia, 1984; y LEMEUNIER, G.: "Conquista agrícola y feudalismo desarrollado", *Historia de la región murciana*, VII, pp. 19-77, Murcia, 1984.

3 Las Pías Fundaciones del cardenal Belluga constituyen sin duda la operación de mayor calado en este sentido. Los estudios más significativos sobre las mismas han sido publicados por CREMADES GRINÁN, Carmen María (Ed.), *Estudios sobre el cardenal Belluga*, Murcia, 1985. En cuanto a las aspiraciones de creación de Universidad, existentes ya en el siglo XVII y asumidas por todos los obispos murcianos de la primera mitad del Setecientos, las hemos recogido en nuestra tesis doctoral (inédita), MAS GALVAÑ, C., *Jansenismo y reforma educativa en la España ilustrada: el Seminario de San Fulgencio de Murcia*, Universidad de Alicante, Fac. Filosofía y Letras, 1986, tomo I. Es precisamente en este doble contexto, ofrecido por las Pías Fundaciones y la aspiración universitaria, en el que hemos de situar el hecho —a todas luces anómalo— de que Belluga crease en 1741 una cátedra de Derecho Civil en el interior del Seminario de San Fulgencio.

XVIII ⁴. Así, tanto las ideas de reforma universitaria abrigadas por los gabinetes ilustrados, como el interés que pusieron en la creación de un clero secular culto e ilustrado (fiel colaborador reformista políticamente dócil a través de su educación en las doctrinas regalistas) hallaron su particular plasmación en el territorio murciano. Precisamente es la ausencia de Universidad lo que nos explica que ambas cuestiones (reforma universitaria y fomento de la educación del clero secular) fuesen, allí, tan unidas en el plano institucional y en el ideológico.

Sin duda, el ejemplo más característico lo ofrece el Seminario de San Fulgencio de la propia ciudad de Murcia, reformado en la década de 1770 por uno de los más eficaces agentes para la difusión ilustrada con que contó el gobierno: el obispo de la diócesis, D. Manuel Rubín de Celis ⁵. De hecho, dicha reforma supuso tal ruptura en el tradicional reparto de influencias sobre la enseñanza clerical y en lo ideológico ⁶, que la propia posibilidad y continuidad de la misma hubo de descansar fundamental y casi unilateralmente sobre el apoyo gubernamental, mientras que el municipio —alineándose con las órdenes religiosas y sus clientelas— se mostró francamente adverso ⁷. Pese a ello, y precisamente merced al apoyo gubernamental, el modelo ideológico para la formación del clero secular en la diócesis de Murcia quedó firmemente establecido sobre los planes de estudios del Colegio fulgentino, como poco hasta fin de siglo ⁸.

Planteamientos semejantes —con las matizaciones pertinentes— pueden observarse igualmente a través de la peripecia seguida por el Colegio de la Purísima de Lorca para su creación y durante sus primeros tiempos. En este caso, el apoyo del municipio a la iniciativa eclesiástica de fundación de un Colegio clerical fue, al contrario que en

4 Como es sabido, las claves de este intervencionismo estatal reposan en el Concordato de 1753 y en la Real Cédula sobre erección de Seminarios conciliares de 1768. *Vid.*, MARTIN HERNANDEZ, Francisco, *Los Seminarios españoles en la época de la Ilustración*, Madrid, 1963; MARTIN HERNANDEZ, Francisco, "La formación del clero en los siglos XVII y XVIII", *Historia de la Iglesia en España*, B.A.C., tomo IV, Madrid, 1979.

5 La personalidad de este obispo y el contenido de la reforma del Seminario de San Fulgencio en MAS GALVÁN, Cayetano, "De la Ilustración al liberalismo: el Seminario de San Fulgencio de Murcia", *Trienio*, n.12, noviembre 1988, pp. 102-175.

6 Desde los tiempos del pontificado de Belluga (en virtud de las Constituciones de 1707), los colegiales fulgentinos recibían enseñanzas de filosofía y teología en las aulas públicas de los franciscanos, jesuitas y dominicos. Al promulgar su primer plan de reforma de estas enseñanzas, en 1774, Rubín suprimiría esta dependencia, crearía las cátedras correspondientes en el interior del Seminario, las concedería a profesores no religiosos y las llenaría de contenidos totalmente nuevos en la dirección más plenamente ilustrada. Algo que los regulares jamás le perdonarían. *Vid.*, MAS, C., "De la Ilustración al liberalismo...", *cit.*

7 En 1781, Murcia estuvo más cerca de conseguir una Universidad que en ningún otro momento anterior. El bloque cerrado regulares-Concejo de Murcia (al que se incorporaría gustosamente la Inquisición) se encargó de impedirlo. La independencia de la actuación episcopal, respaldada desde el Consejo de Castilla, se hallaba garantizada porque la dotación del Seminario dependía exclusivamente de las rentas decimales diocesanas. Inversamente, ayuntamiento y regulares vieron imposibilitada su intervención —cosa que hubiera supuesto ineludiblemente obtener concesiones ideológicas— por este mismo hecho. *Ibidem*, pp. 127-129.

8 La transmutación del regalismo a partir del mal llamado "cisma de Urquijo" supuso también en Murcia el fin de las reformas y el inicio de un período de dura represión, plasmado en la pérdida del respaldo gubernamental a los anteriores planes de estudios y en una auténtica ofensiva inquisitorial. *Vid.* MAS, C., *op. cit.*, pp. 148-161; y VIÑAO, A., "El Colegio-Seminario de San Fulgencio: Ilustración, liberalismo e Inquisición", *Areas*, 6 (1986), pp. 17-48.

Murcia y hasta donde hemos podido seguir, incondicional. En otras palabras, los grupos de poder tradicionales actuaron siempre unidos y sin fisuras⁹. Intervénían en este sentido diversos factores que iremos desglosando (el intento de creación de una nueva diócesis, ligado al particularismo local; pero también veremos cómo se asociaba tal intento al proyecto de proporcionar a Lorca estudios homologables universitariamente). Ahora bien, los iniciales planteamientos ideológicos, los límites y fines del Colegio, e incluso el papel que dicha fundación podría desempeñar en la más general estrategia de creación del obispado, fueron reconducidos por la actitud episcopal y por la actuación gubernamental (esto es, por el que pudiéramos considerar bloque reformista), forzando la adaptación —al menos en las cuestiones ideológicas e institucionales fundamentales— al modelo representado por el Colegio fulgentino.

EL PROYECTO DEL ABAD ARCOS

Inaugurado en 11 de mayo de 1788, el Colegio de la Purísima Concepción de la ciudad de Lorca tuvo sin embargo una larga y laboriosa génesis¹⁰.

Los deseos o los intentos por crear un Colegio clerical en Lorca no eran en modo alguno nuevos. La documentación manejada permite registrar diferentes iniciativas de relativa antigüedad en este sentido. En primer lugar, se hallaban las cesiones de bienes efectuadas en sus testamentos por cuatro canónigos de la Colegial de San Patricio en favor de dicha iglesia para la erección de un Colegio, básicamente dedicado al servicio

9 Es decir, el bloque constituido por el municipio y (en este caso) el cabildo de la Colegial de San Patricio.

10 El dato en Archivo Histórico Nacional, *Consejos*, leg. 5.495, n. 22, “Lorca y Cuenca, 1788. Expediente formado en virtud de la Real Orden de Su Majestad con la que se remitió a consulta del Consejo una representación y varios documentos de la ciudad de Lorca sobre que, en consideración a la falta de enseñanza pública que hay en ella, se pongan cátedras de gramática, retórica, filosofía y teología en el Colegio de la Concepción nuevamente fundado...”, informe del rector Robles Vives de 21 de agosto de 1790.

La documentación básica manejada en este artículo es la contenida en el expediente citado, así como en otros 3 del mismo legajo del A.H.N.:

— “Lorca y Cartagena, 1779. Expediente formado a instancia del Dr. D. Francisco de Arcos y Moreno, abad y canónigo de la Santa Iglesia Colegial de Lorca sobre aprobación de la fundación que intenta hacer de su caudal de una Casa-Colegio para doce jóvenes, con las calidades que expresa”.

— “Lorca, 1790. Expediente formado en virtud de Real Orden de Su Majestad y representación de D. Manuel de Robles Vives, abad de la Colegial de San Patricio de Lorca y Rector del Colegio de la Purísima Concepción nuevamente fundado en aquella ciudad sobre que se habiliten los cursos de filosofía y teología que se tengan en dicho Seminario para recibir los grados menores y mayores en cualquiera Universidad”.

— “Lorca y Cuenca, 1815. Expediente formado en virtud de Real Orden de Su Majestad con la que se remitió al Consejo para la providencia que estimase, o en caso necesario consulte a Su Majestad su dictamen una representación documentada del Ayuntamiento de Lorca, solicitando que a fin de fomentar el interesante ramo de instrucción pública se conceda al Real Colegio de la Purísima Concepción el título de Seminario Conciliar, y que se inviertan en él las rentas que salen de Lorca para sostener en Murcia y Cuenca becas de gracia y cátedras de latinidad”.

Como quiera que estos cuatro expedientes se hallan completamente desordenados y mezcladas algunas de sus partes con los restantes, resulta difícil asignar con precisión cada documento a su correspondiente expediente dentro del legajo. Por esta razón, y por no estar numerados los documentos, nos limitaremos a indicar su fecha para referirlos, normalmente en el texto.

del coro de la misma y a la enseñanza de la gramática latina y del canto eclesiástico. Todos estos testamentos son de la primera mitad del XVIII e incluso de finales del XVII ¹¹.

En segundo lugar, y de forma casi inmediata a la iniciativa del abad Arcos que desembocaría en la creación del Colegio, hay que contar con la situación creada tras la expulsión de la Compañía de Jesús, en la que ya se deja ver la mano del Consejo de Castilla y la participación municipal. Los padres de la Compañía contaban en Lorca con un Colegio (el de San Agustín), fundado en 1713, en donde se impartían enseñanzas de primeras letras, gramática, filosofía y teología escolástica y moral ¹².

Al producirse la expulsión, una Real Orden de 27 de diciembre de 1768 dictaminó que se crease una cátedra de Gramática dotada con 300 ducados del caudal de Temporalidades ¹³. Poco después, el 23 de abril de 1769, el Consejo resolvía destinar el Colegio de San Agustín a casa de pupilage o seminario de pensionistas “con aulas y habitaciones para los maestros de primeras letras, latinidad y retórica” ¹⁴, de acuerdo con el destino que se pretendió dar desde la Corte, por lo general, a los antiguos Colegios de la Compañía.

Desde ese momento, quedó claro que el horizonte de aquellas iniciales aspiraciones por crear en Lorca un Colegio clerical —del tipo concreto que fuese— quedaba inexcusablemente fijado en las salas del Consejo de Castilla. Pronto, además, la idea se vincularía en buena medida al más amplio designio de erección de una nueva diócesis sobre Lorca y su diezmería (resucitando la antigua y casi mitológica de Eliocroca) ¹⁵, y éste a su vez, al resultado de la gran empresa que suponía la colonización del campo de Lorca ¹⁶.

De todos modos, el proyecto aún tardaría en tomar cuerpo definitivamente después de 1768. Pero las distintas decisiones tomadas lo fueron siguiendo el cauce que acabamos de señalar. Así, en 1770 la ciudad y el cabildo propusieron agregar algunas rentas para el futuro Seminario, siendo una de ellas una cuota sobre los

11 Se trata de los vínculos creados en los testamentos de: D. Juan Rubira (o de Rovira), en 14 de octubre de 1693; de D. Diego Contreras de Lara, en 20 de agosto de 1707; de D. Francisco Bravo Ruiz Soler, de 1727; y D. Juan Diego García de Alcaraz (en realidad, cinco testamentos otorgados entre 1737 y 1739, creando un vínculo y mayorazgo con manda expresa en el segundo y tercero de los mismos para que se erigiese un Colegio una vez extintas las líneas del vínculo que creaba).

12 ARNALDOS PEREZ, Manuel, *Los jesuitas en el reino de Murcia (apuntes históricos)*, edición del autor, (s.l., s.a.) pp.141-153. Según el autor, las enseñanzas de primeras letras y gramática se hallaban dotadas por el municipio (resolución de 15 de mayo de 1713), mientras que las restantes lo eran merced a la donación inter vivos hecha de toda su hacienda en favor de la Compañía por el presbítero licenciado Rodrigo Pérez Coronel (otorgada en 15 de junio de 1712 ante Luis Eugenio de Gumiel). Arnaldos estima que la renta anual de los bienes de D. Rodrigo alcanzaba los 1.000 ducados.

13 “Expediente... sobre que... se pongan cátedras de gramática, filosofía, etc.”, *cit*.

14 ARNALDOS, p. 144.

15 Muy poco sabemos acerca de esta sede, cuyo primer y único obispo conocido fue Succeso, que asistió al concilio de Elvira. *Vid.*, VV.AA., *Diccionario de historia eclesiástica de España*, artículo “Eliocroca” (por J. Vives), Madrid (1982), tomo II, col. 782.

16 Como destaca GIL OLCINA, A., Campomanes dedicó la más extensa nota a su *Discurso sobre el fomento de la industria popular*, de 1774, precisamente a la colonización del campo de Lorca (*apud*, GIL OLCINA, Antonio, “Los pantanos de Puentes y Valdeinfierno”, *Agua, riegos y modos de vida en Lorca y su comarca* (F. Calvo-F. Chacón, coords.), Murcia, 1986, pp. 112-113. Deseo agradecer al profesor Gil Olcina las valiosas indicaciones que me ha proporcionado en la redacción de este trabajo.

derechos de roturas que pagarían a la ciudad los arrendadores de tierras¹⁷. Más tarde, en 1772 (año, que sepamos, en el que el cabildo eclesiástico y el municipio concretaron la solicitud de creación de nueva diócesis)¹⁸, el propio ayuntamiento lorquino propuso establecer tres cátedras (de gramática, poesía y retórica latinas)¹⁹, en línea con la resolución del Consejo de 1769. Estas propuestas fueron siempre bien recibidas en Madrid e incorporadas a los autos para la erección de Seminario sobre la antigua casa de la Compañía, cuyo expediente permaneció abierto durante todo este tiempo en el Consejo. Así, el 24 de noviembre de 1772 el fiscal Campomanes informaba favorablemente las propuestas lorquinas y recordaba lo conveniente de la erección de Seminario en Lorca. A este efecto, se pensaba también en Madrid que debían establecerse igualmente enseñanzas de filosofía y teología, dotándolas con los bienes cedidos por D. Rodrigo Coronel a los jesuitas y que se entendían subrogados en los de la ciudad y Colegial para la enseñanza tras la expulsión²⁰.

Concedida desde un primer momento —al menos en el plano de los buenos propósitos— la necesidad de crear el Seminario, las dificultades durante estos años parecieron quedar especialmente centradas en el problema del logro de una dotación suficiente e inmediata, sin el problemático horizonte representado por los antiguos vínculos de los canónigos de la Colegial, el caudal de las Temporalidades de la Compañía o, más aún, los arbitrios sobre la colonización. Es así como creemos debe entenderse, en parte, el carácter de la iniciativa tomada por el abad de San Patricio que, no sin escollos, llevaría finalmente a la creación del Colegio de la Purísima de Lorca.

El 9 de abril de 1779²¹, el Dr. D. Francisco de Arcos y Moreno, abad y canónigo de la Iglesia Colegial de Lorca, comparecía en dicha ciudad ante el escribano público D. Victoriano José de los Corrales, e invocando que el principal destino de las rentas eclesiásticas era —al margen de la decente manutención— el beneficio del culto divino y el socorro de los pobres, expresaba su voluntad de fundar una Casa-Colegio con el título de la Purísima Concepción para el recogimiento, enseñanza y aprovechamiento de la juventud. Las razones que Arcos esgrimía procedían también del gran aumento que según él había experimentado la ciudad y jurisdicción²², “entre ellas muchas

17 “Expediente formado a instancia del Dr. D. Francisco Arcos...”, dictamen fiscal de 27 de agosto de 1781.

18 *Apud* MERINO ALVAREZ, Abelardo, *Geografía histórica de la provincia de Murcia*, Madrid, 1915 (reed. facsímil Murcia, 1978), p. 459; y BERMUDEZ AZNAR, Agustín, “El reformismo institucional ilustrado en el reino de Murcia durante el siglo XVIII”, *Historia de la región murciana*, VII, Murcia, 1984, p. 104.

19 “Expediente... sobre que... se pongan cátedras de gramática, retórica, etc.”. Para dotarlas, ya se solicitó del Consejo —en 8 de junio de 1772— la reintegración a Lorca del beneficio de San Clemente, del que más adelante hablaremos.

20 *Ibidem*.

21 Salvo indicación en contrario, todas las referencias siguientes están tomadas del “Expediente formado a instancia del Dr. D. Francisco de Arcos y Moreno, abad y canónigo del Santa Iglesia Colegial de Lorca sobre aprobación de la fundación que intenta hacer de su caudal de una casa colegio...”.

22 Más de 50.000 personas incluyendo los pueblos de Mazarrón, Fuente-Alamo, Puerto Lumbresas y Coy, comprendidos en el diezmatorio de Lorca, según Arcos. Por otra parte, cuando en 1772 Lorca pidió se le reintegrara el beneficio de San Clemente (“Expediente... sobre... se pongan cátedras de gramática, etc.”, *cit.*) se daba como total para su vecindario la cifra de 8.582 vecinos. Otro certificado incluido en ese mismo expediente manejado, de 14 de enero de 1791, daba la de 8.885 vecinos en la jurisdicción de la ciudad, por padrón parroquial de 1790. En 1787, el censo de Floridablanca arrojaba efectivamente un total

pobres y miserables que no tienen con qué sustentar a sus hijos para una buena educación”, y de la relativa lejanía del único Seminario de la diócesis, el de San Fulgencio de Murcia ²³. En definitiva, dos tipos de razones muy tradicionales y nada novedosas al intentar fundamentar este tipo de establecimientos. Por supuesto, al margen de ello, hemos de dar por entendido que Arcos conocía sobradamente las intenciones del Consejo y su fiscal en torno a la cuestión del futuro Seminario lorquino.

En consecuencia, Arcos cedía todos sus bienes raíces, muebles y semovientes (salvo unas alhajas de corta consideración y 3.000 reales de vellón destinados a las personas que expresaba en su testamento), así como los productos de su cargo de abad ²⁴ de por vida, haciendo donación irrevocable inter vivos en favor de la Casa-Colegio, y en su nombre al abad (a la sazón, él mismo) y cabildo de la Colegial de San Patricio de Lorca, a quienes nombraba como patrono-administrador y gobernador. El inventario de sus bienes, que Arcos practicaba ascendía a la nada despreciable cifra de 471.514 reales y 3 maravedís ²⁵.

La cesión llevaba aparejadas, lógicamente, algunas condiciones. Así, caso de morir Arcos sin estar terminada la Casa-Colegio, sus designios habrían de continuarse por la junta de gobierno que había nombrado, terminándose el edificio con los productos de los bienes raíces señalados y con el líquido resultante de los bienes muebles una vez efectuado el inventario *post-mortem*. En cuanto al número de becas, Arcos lo fijaba en 12²⁶, exclusivamente destinadas a pobres ²⁷ naturales y vecinos de Lorca y pueblos de su término y diezmatorio. Como era habitual en la época para el ingreso en este tipo de instituciones, también se exigía de los futuros colegiales ser de buena vida y costumbres, hijos de padres de “buenas obligaciones” para ascender al estado eclesiástico, y de edad competente. Detalle significativo, serían preferidos para

de 56.043 habitantes para Lorca y su *diputación*. Sobre estas cuestiones, *vid.* JIMENEZ DE GREGORIO, Fernando, *Notas para una geografía de la población murciana*, Murcia, 1956.

23 Desde que en 1723, por bula de Clemente XI, Belluga agregó al Seminario de San Fulgencio 2 de las 70 porciones de la masa decimal de Lorca, la ciudad disponía de 3 becas reservadas para sus hijos en el Colegio murciano.

24 Según la *Lista de las piezas eclesiásticas de este obispado de Cartagena* (Archivo Catedral Murcia, leg. 7, n. 89), hacia 1775 el abad de San Patricio percibía una renta anual de 15.000 reales. Una cuantía muy inferior al decanato (70.000 reales) o cualquiera de las canonjías (entre 50.000 y 25.000 reales), y equivalente a las raciones enteras (17.000 reales) de la Catedral de Murcia.

25 Según detallaba, podemos resumir el inventario de sus bienes como sigue:

- Tres casas (su morada, la que compró en la calle de la Zapatería para el Colegio, y una casa-fábrica de salitre), valoradas conjuntamente en 86.025 reales y 29 maravedís.

- El principal de un censo de 588 reales y 8 maravedís.

- Muebles y alhajas por valor de 65.000 reales.

- Semovientes (muladar y lanar), por valor de 70.120 reales.

- Dos heredades, una hacienda, siete olivares y 4 pedazos de tierra, por valor de 249.780 reales.

Se trata de una fortuna que no podemos considerar excesiva, pero sí equiparable a las de la oligarquía lorquina del momento. *Vid.*, VV.AA., *Las obras hidráulicas en el reino de Murcia durante el reformismo borbónico. Los Reales Pantanos de Lorca*, Murcia, 1986, p. 129.

26 También pedía Arcos que el Colegio llevase el título de la Purísima Concepción, y que los colegiales vistiesen manto de paño azul ordinario igual en figura y forma a como lo usaban los del Seminario de San Fulgencio de Murcia. La beca debería ser de bayeta blanca ordinaria con la misma regla de San Fulgencio, y bonete como se usaba en la Colegial y obispado.

27 En la nota 60 veremos el sentido del término.

todas y cada una de las becas aquellos que fuesen infantillos de coro de la Colegial, cosa que además habría de observarse perpetuamente.

Arcos confesaba que el objeto que le había movido a la fundación era —al margen de lo señalado— una cierta decadencia en el culto divino por la corta dirección, varias ocupaciones y genio juvenil de los infantillos de coro. Por lo tanto, los 12 colegiales vivirían en clausura bajo un rector a quien estarían inmediatamente sujetos, nombrado privativamente por el abad y cabildo (aunque el primer nombramiento lo haría el propio fundador), preferiblemente siempre persona de Lorca u otro sacerdote de ejemplar vida, literatura y costumbres. Como obligación básica de los colegiales, habrían de asistir diariamente, mañana y tarde, al servicio del altar y el coro de la Colegial, empleando el tiempo restante (pero sólo el tiempo restante) en el estudio del canto llano y figurado, a cargo del Maestro de Capilla y del Sochantre.

El número de colegiales podría aumentarse o reducirse por el abad y cabildo, en función de la evolución futura de las rentas. Llegado el caso, incluso podría establecerse una cátedra de Gramática para instrucción de los colegiales con beca, o de aquellos otros que, pagando sus alimentos, “podrían admitirse bajo la misma clausura y beca” (es decir, porcionistas)²⁸.

Dentro de su afán por presentar una boyante situación en Lorca, Arcos manifestaba que con la evidente pujanza de la Colegial (con 16 canónigos, incluido Lectoral, Doctoral y Magistral)²⁹, y si al cabildo le pareciera y existiese el suficiente caudal, podrían aumentarse los estudios incluyendo enseñanzas de gramática, retórica, filosofía, teología y cánones. Incluso podrían ser admitidos naturales de Totana, Aledo, Mula y Huércal, con las mismas condiciones de ingreso que el resto, aunque siempre manteniendo la preferencia de los lorquinos³⁰.

Yendo aún más lejos, y caso de establecerse estudios mayores, el abad y Colegial tendrían presentes a los familiares sanguíneos del fundador, aunque no fuesen naturales de Lorca ni del obispado. Esos mismos familiares gozarían siempre del derecho a presentar 2 candidaturas para colegiales becados, de entre los cuales el cabildo elegiría uno.

Debería existir además un vicerrector para celar e instruir directamente a los colegiales, especialmente en la asistencia diaria al coro. Sería igualmente de nombramiento privativo del abad y cabildo (el primero también lo nombraría el fundador). Por lo demás, si éste viviese lo bastante para ver funcionar el Colegio, arreglaría todo lo tocante a gobierno, colegiales...

Por testamento, Arcos dejaba constituida una junta de administración de sus bienes, cuyos miembros serían nombrados, a medida que falleciesen, por el cabildo de la Colegial. En ningún caso tendría esta junta más de 3 componentes. A ella correspondería el trato con labradores y arrendatarios, la mayor agilidad administrativa y el descargo del cabildo en estas materias. Debería también mantener un remanente para arreglo de tierras, acequias, etc. y rendirían cuentas anualmente al cabildo para que éste las aprobase y archivase.

28 Nada se decía de manteístas o externos.

29 El abad y 15 canonjías, incluyendo la de la Inquisición, según la *Lista de las piezas eclesiásticas...*, *cit.*

30 Como quiera que estos últimos pueblos no pertenecían al diezmatorio de Lorca, Arcos lo justificaba indicando que, en cambio, algunos de sus vecinos sí poseían tierras en el mismo.

Pedía Arcos, en fin, que el Colegio se colocase y estuviese siempre bajo Real Protección, en cuanto a la supervisión, visitas y demás, estando siempre obligado el cabildo a colaborar en estas tareas y a no ocultar documentos.

Caso de que el Consejo no aprobase la fundación o no aceptase el Patronato, se entendería que la escritura sería del todo inválida, reservándose el fundador el derecho de dar el destino que creyese conveniente a sus bienes. Si muriese sin hacerlo, lo sustituiría el cabildo de la Colegial a quien Arcos encomendaba actuase siempre guiado por el afán de alimentar a los pobres del diezmatorio, enseñanza del Santo Temor de Dios, utilidad de la República y servicio del culto divino.

El documento iba acompañado por poder otorgado, el mismo día 9 de abril de 1779, por Arcos a D. Simón de Zabala, agente de negocios de los Reales Consejos en Madrid, con el fin de que lo presentase ante el Consejo de Castilla solicitando la aprobación de la fundación y su colocación bajo el Patronato Regio³¹.

Conviene preguntarse, antes de pasar adelante, acerca de la intención última que guiaba al abad Arcos al plantear su proyecto, ináxime cuando se conocía la idea del Consejo de crear en Lorca un Seminario cubriendo el hueco dejado por los expulsos. Hemos de tener muy en cuenta, en este sentido, que la erección de un Seminario implicaba, de acuerdo con lo dispuesto en el decreto conciliar *proseminariis*, tanto el que la dotación se efectuase básicamente sobre la masa decimal, como el que la institución quedase enteramente sometida a la jurisdicción episcopal. Es este último aspecto, sobre todo, el que nos parece más relevante. Al dotar Arcos el nuevo Colegio con sus propias rentas, no sólo evitaba forzar la contribución de la Colegial a su mantenimiento —aspecto éste, a nuestro juicio, de muy relativa importancia—, sino que intentaba hacer prevalecer sus derechos personales (y de la Colegial) como patrono fundador, en particular frente a la jurisdicción ordinaria. Desde este punto de vista, no podemos dejar de ver en la iniciativa del abad un intento por capitalizar desde Lorca el control del futuro Seminario (y de la enseñanza clerical), antes que la institución se convirtiese en un hecho impuesto desde instancias exteriores, y en particular desde Murcia. Iniciativa que puede entenderse también como primer paso en el desarrollo de una estrategia a más largo plazo, orientada en primer término al logro de una institución en todo equivalente a un Seminario, con estudios de nivel superior pero sin depender de Murcia; y en segundo término, a constituir un argumento más para la segregación de la diócesis.

Se trata de un planteamiento que va más allá del simple particularismo, insertándose en los modos de pensar y de actuar propios de unos grupos locales de poder tan potentes como los lorquinos³², de los cuales el cabildo de la Colegial —en los aspectos económico y de control social e ideológico— puede ser considerado parte integrante. Hecho que viene corroborado, en distinto plano, precisamente por la finalidad principal que Arcos fijaba para el Colegio: el servicio diario al coro, destinado a servir al mayor lustre y prestigio de la Insigne Colegial. Propósito éste que se enmarca en las concepciones intelectualmente más pobres y tradicionales acerca de los contenidos de

31 Zabala sustituiría el poder en D. Francisco Cipriano Ortega, Simón Gómez Pérez, Narciso Báñez y Juan Antonio Monasterio, procuradores de los Reales Consejos. A.H.N., 5.495, “Expediente formado a instancia del Dr. D. Francisco Arcos...”, 17 de abril de 1779.

32 Sobre la oligarquía lorquina, *vid. Las obras hidráulicas..., cit.*, pp. 173-196.

la enseñanza clerical. En definitiva, no juzgamos arriesgado afirmar que estamos ante la plasmación en el terreno eclesiástico y educativo de actitudes similares a aquellas otras que la oligarquía lorquina mantendría frente a las iniciativas reformistas en materia de obras hidráulicas. En este último campo, la presencia del agente gubernamental (el Comisionado Antonio Robles Vives) apenas fue mínimamente tolerada durante el tiempo de su gestión. En el asunto del Colegio, lo que se pretendió no fue otra cosa que evitar la intromisión del que también podríamos considerar agente del reformismo en este terreno: el obispo Rubín de Celis ³³.

LA OPOSICION DEL OBISPO RUBIN DE CELIS

El 19 de abril del mismo año, Campomanes estimó —en principio— “como sumamente útil y oportuno para la instrucción de la juventud” el Colegio que se pretendía fundar. Pero sin embargo, pedía que previamente informasen sobre el asunto tanto el obispo de la diócesis, como D. Francisco Gabriel Herranz, ministro de la Chancillería de Granada, en ese momento en Lorca.

El primero de los informes en llegar fue el del obispo de Cartagena, en cuya diócesis se encontraba —y se encuentra— situada la ciudad de Lorca. El tenor de este informe ³⁴, profundamente negativo en relación a la creación del Colegio tal como había sido propuesta, es un buen exponente del talante y la mentalidad de su autor, paradigmática figura dentro del episcopado ilustrado español. Y ello dejando al margen incluso cualquier animosidad que Rubín pudiera abrigar contra el proyecto, en la medida en que éste fuese una pieza más en los intentos de segregación de Lorca para crear nueva diócesis.

Frente a las tesis de Arcos, los puntos de vista de Rubín de Celis eran, pues, los del reformismo que encarnaba. El obispo hallaba varios y graves inconvenientes en la creación del Colegio, de los que deducía la “ninguna utilidad” para Lorca y su Colegial. En primer lugar, y sin embargo de la declaración de principios que hacía Arcos sobre sus buenos fines, estimaba D. Manuel que “ni más viciosos pueden ser sus principios, ni más contrarios sus fines a la verdadera Disciplina de la Iglesia”. En efecto, no podía dejar de extrañar que Arcos dijese que los fondos económicos aportados fueran el producto de sus ahorros en los veinte años de goce de su prebenda; pues:

“Los medios, con que indica aumentó este caudal, son de los que si yo hubiese tenido noticia en la Santa Visita, que personalmente hice en el año pasado de 1776, no hubiera podido disimular en fuerza de mi Ministerio Pastoral”.

Aun así, no creía Rubín que los réditos del capital de Arcos bastasen, pues calculando un interés medio del 3% anual, apenas reeditarían 14.130 reales y 17 maravedís, para mantener, como se proponía, a 12 colegiales, rector, vicerrector y los

33 Correlativamente, cabría preguntarse si desde Lorca se temía la introducción de las corrientes ilustradas que Rubín de Celis acababa de poner en vigor en el Seminario de San Fulgencio.

34 De 17 de julio de 1779.

criados necesarios (no menos de 5, en opinión de Rubín, incluyendo alimentos y salarios). Y esto sin contar al Maestro de Capilla y al Sochantre —a quienes habría de pagarse más en razón del trabajo extraordinario con que ahora se les quería cargar—, cuando era sabido que las rentas de fábrica de la Colegial de San Patricio eran tan cortas de por sí que no daban lo bastante para proporcionar al Maestro de Capilla una decente manutención³⁵.

Amén de la cuestión de los salarios y la manutención, se encontraba la del gasto necesario para el arreglo de casas y de los desperfectos que en las mismas se producirían continuamente, dada su proximidad al río y a las ramblas, problema al que Rubín concedía una gran importancia³⁶. En conclusión, debiendo componerse la comunidad de 21 individuos, sólo tocaban a 672 reales y 29 maravedís para el alimento diario, sin descontar los salarios indicados y la parte que se llevase el arreglo de los destrozos que periódicamente causarían las avenidas³⁷.

Si la cuestión de las cortas rentas no era una menudencia soslayable, Rubín cargaba las tintas en otros dos argumentos negativos, precisamente aquéllos en los que más claramente se ponía de manifiesto su talante ilustrado.

Ante todo, D. Manuel no veía *utilidad* alguna para Lorca ni los otros lugares que se señalaban. A la vista del proyecto del abad —quien plausiblemente aspiraba por su parte a ser el futuro obispo de la rediviva sede eliocroquense—, no había en él más lugar para la instrucción de los colegiales que el reservado al canto llano, con lo que acabados los años de Colegio, difícilmente podrían hallar decente acomodo: terminando su permanencia alrededor de los 20 años de edad, no conocerían ni la gramática ni las demás ciencias, viéndose imposibilitados para acceder —por sus cortos estudios— al sacerdocio. Las consecuencias serían tanto más graves, en el concepto del obispo, puesto que a esa edad: “ya no valdrán ni para labradores” —acostumbrados a una vida sedentaria— ni tampoco querrían serlo. Este argumento no era para Rubín tan pintoresco como en principio parece, pues él mismo lo había podido verificar en el caso de los seminaristas del Colegio de San Leandro³⁸, de la propia Murcia. Allí, aunque se les instruía en la gramática con todo esmero, “el mayor ascenso, y acaso único, que les proporciona es, o una sacristía, a que les destino con una corta renta quales son todas las de este obispado, o a una plaza de músico de alguna iglesia parroquial, la que más de ochenta ducados”. De manera que en Lorca:

35 Razón por la cual —según el obispo— se hizo necesario que los anteriores obispos desmembrasen de las demás fábricas algunas porciones decimales de trigo y cebada. Tal medida no sólo siguió siendo insuficiente para pagar al Maestro de Capilla, sino que además provocó las quejas de las parroquias lorquinas.

36 En este argumento, Rubín cargaba demasiado las tintas, dado que el futuro emplazamiento del Colegio en la calle Zapatería distaba mucho de hallarse tan expuesto como decía al riesgo de avenidas.

37 Además, el dato que Arcos apuntaba acerca de la población de Lorca y su diezmatorio, cifrándola en torno a las 50.000 personas, para Rubín era inexacto, pues según el catastro que él mismo efectuó en la Visita pastoral de 1776, sólo alcanzaba a 36.091. Sería preciso conocer a fondo los métodos de elaboración y el área comprendida en cada evaluación para contrastar estas cifras.

38 En efecto, desde diversos puntos de vista, el Seminario de San Leandro era lo más parecido que existía en la ciudad de Murcia al proyecto de Arcos y a lo que fue el Seminario de San Fulgencio antes de los tiempos de Belluga. Este lo fundó precisamente con la intención de formar infantillos de coro para el servicio de la catedral, descargando así de esta pesada obligación cotidiana a los fulgentinos.

“Podré asegurar perderá el Estado tantos vasallos útiles, quantos Colegiales entrasen en la referida casa-colegio, y otros tantos vagos y sin destino alguno tendrá Lorca”.

Los presupuestos en los que Rubín fundaba su posición son muy claros. De hecho, lo que aquí subyacía —como ya avanzamos— eran dos concepciones radicalmente distintas de lo que había de ser, en los respectivos conceptos de Arcos y de Rubín, la educación en general y la de los clérigos en particular. El primero se encontraba aún en las posiciones más tradicionales en torno a lo que habría de ser un Seminario clerical: poco más que un Colegio de acólitos para el servicio cotidiano en las funciones de la Iglesia mayor, donde por tanto, difícilmente tenían cabida otras enseñanzas que las del canto y —en el mejor de los casos— los rudimentos de la gramática latina.

Esta fue la realidad de la gran mayoría de los Seminarios conciliares españoles durante el siglo XVII, incluyendo al Seminario Conciliar de San Fulgencio de Murcia. Cambiarla radicalmente fue tarea en extremo ardua y lenta, que llevó más de cinco décadas³⁹ a los predecesores de Rubín en la mitra. El mismo culminaría ese cambio con las reformas de los planes de los estudios (inexistentes en San Fulgencio durante todo el siglo XVII) de filosofía, teología y ambos derechos, dentro de la línea más plenamente ilustrada y recién terminadas en 1778. Así pues, para Rubín, el verdadero sentido de la educación eclesiástica era el de formar un clero secular diocesano culto y selecto, buen conocedor de las herramientas filosóficas y teológicas, y perfecto conocedor de la “verdadera” disciplina eclesiástica a través del estudio canónico. Como quiera que dicho estudio se hallaba enteramente orientado en la dirección regalista, esto valía tanto como decir un clero *útil*, no sólo a la Iglesia, sino también al Estado. Por eso Rubín concluía este punto de su informe afirmando que: “No son Colegios de Músicos lo que necesita la Iglesia para consumir la obra del Señor, ni las rentas eclesiásticas se deben emplear en otra cosa que en utilidad de la Iglesia y sus pobres”.

Es decir, en el sentir de Rubín, no necesitaba ni la Colegial de Lorca de tales músicos en el coro, ni los pobres de tales establecimientos. Al contrario, lo que aquella Colegial precisaba era ofrecer una decente manutención a sus capellanes, músicos, infantillos y demás sirvientes, pues era poca la existente para la asistencia diaria, hallándose tan pobres que tenían que mendigar. Según su testimonio, el propio Rubín hubo de repartir limosnas entre ellos durante la visita pastoral de 1776.

Ahora bien, estas ideas básicas ante la educación del clero se hallaban unidas a otro argumento de tanto o mayor peso en la mente del prelado: el de la defensa de la jurisdicción y preeminencia episcopal frente a cualquier intento por menoscabarla o de crear islotes exentos frente a la misma. Rubín, que continuaba en esto igualmente la labor acometida por todos los obispos murcianos del XVIII —desde Belluga—, lo hacía particularmente desde los argumentos brindados por el regalismo de sesgo episcopalista que le caracterizó. De ahí que declarase en su informe que, en su parecer, lo más extraño del proyecto de Arcos era que el ordinario de Cartagena no ejerciera jurisdicción alguna sobre el Colegio en ningún momento:

39 Desde las primeras reformas de Belluga (1707) hasta la resolución del llamado pleito de la Preceptoría (1761), que ponía fin al secular dominio que ejercía el cabildo catedral sobre el Seminario.

“Y por este medio entregar, con el pretexto de la protección del Consejo, la dirección de un Seminario, que erigido se debía considerar como ramo del Conciliar, a unos canónigos de una Iglesia Colegial”.

Fundamentando su postura desde el punto de vista histórico-canónico, Rubín recordaba en primer término lo perjudiciales que habían resultado las exenciones del derecho ordinario y la separación de la legítima potestad de los superiores a quienes Cristo había encargado, desde su fundación, el gobierno de la Iglesia: esto es, al colegio episcopal. Una vez más, lo que de forma inmediata se hallaba presente en la mente de Rubín era lo ocurrido con la historia del Seminario de San Fulgencio, cuya suerte conceptuaba como indesligable de la que corriese la misma instancia episcopal. Como nosotros mismos hemos podido comprobar, desde su fundación en 1592 y durante todo el siglo XVII, el Seminario fulgentino —con el corto calado de contenidos educativos que hemos subrayado— se encontró prácticamente en manos del cabildo catedral de Murcia. El fenómeno corrió en estricto paralelismo a la gran debilidad manifestada en ese lapso por la instancia episcopal en Murcia. Sólo desde los tiempos de Belluga, con el inicio del Setecientos, el panorama experimentó un cambio sustancial, comenzando a ganar el poder episcopal un protagonismo en la Iglesia y la sociedad murciana que sería prácticamente indiscutido ya en tiempos del mismo Rubín. Al propio tiempo, merced a la labor de los sucesivos obispos, el Seminario de San Fulgencio fue cortando ataduras con antiguas dependencias onerosas, y en concreto, con la ejercida sobre la institución por el cabildo catedral ⁴⁰. En consecuencia, no podía ahora Rubín consentir la creación de un Seminario que escapase de nuevo a su jurisdicción y control inmediato, como una pieza más que debía ser en la creación del clero diocesano.

No sorprende que Rubín hiciese hincapié en que el nuevo Seminario había de ser “un ramo del Conciliar”. Esto es, el de San Fulgencio. El obispo se ceñía aquí al texto, meridianamente claro, del Concilio tridentino: “En las (*iglesias*) que tuviesen diócesis dilatadas, pueda tener el Obispo uno o más Colegios, según le pareciese conveniente; los cuales no obstante han de depender en todo del Colegio que se haya fundado y establecido en la ciudad episcopal” ⁴¹. En otras palabras, mientras Lorca permaneciese en la diócesis de Cartagena, y Rubín fuese su prelado, jamás renunciaría a que Colegio alguno, grande o modesto, escapase a su jurisdicción. Ni se brindaría tampoco, obviamente, a ceder lo más mínimo en la medida en que ello supusiera contribuir a que la creación de un Colegio en todo separado del ordinario fuese un jalón de importancia en la segregación de la diócesis.

Como quiera que en el momento presente, tal nueva diócesis no existía, Rubín no alcanzaba a hallar causa justa para la exención, ni veía por qué había de resultar gravosa la sujeción al ordinario. Incluso se permitía algunas expresiones un tanto prepotentes, al indicar que a fin de cuentas habría de ser tan pobre el nuevo Colegio,

40 *Vid.* nota anterior.

41 “In ecclesiis autem, amplas dioecesi, prout sibi opportunum videbitur, habere seminaria: quae tamen ab illo uno, quod in civitate erectum, et constitutum fuerit, in omnibus dependeant”. *El sacrosanto y ecuménico concilio de Trento, traducido al idioma castellano por D. Ignacio López de Ayala*, ed. de París de 1857, ss. XXIII, 15 de julio de 1563, Cap. XVIII, “Norma instituendi seminarium Clericorum, eosque in ipso educandi”, p. 299 (se trata del decreto *proseminariis*).

que sólo daría lástima, y que no podría llegar a levantar siquiera la codicia de ningún administrador puesto por el obispo. Y aunque llegase a darse tal caso, ni aun así sería posible conceder la exención, por el sencillo razonamiento de que si decía el abad que el Colegio tendría por finalidad la de criar a los colegiales para acceder al estado eclesiástico, y al mismo tiempo quería que estuviesen exentos de la jurisdicción de su prelado y pastor, éste no podría nunca “escudriñar” la vida, conducta e instrucción que se requería para ordenarse de sacerdotes, como tampoco podría cortar desórdenes, dirigir acciones y velar por la conducta de los colegiales.

Como obispo, Rubín afirmaba rotundamente que para admitir a cada uno al Orden sacerdotal, debía tomar siempre seguros informes de las costumbres que tuvieran en su juventud y de la firmeza de su vocación. En tales circunstancias de exención, nunca quedaría él, como prelado, con la conciencia tranquila ante los ordenandos. Y se preguntaba cómo podrían satisfacerle los informes de un rector o un vicerrector, de quienes no se sabía en qué forma controlaban a los jóvenes, afirmando severamente:

“Ni en calidad de asignados, permitiría yo ministrasen, ni asistiesen a los divinos oficios, incorporados en el clero, semejantes jóvenes”.

Además, se preguntaba, qué podría esperar un obispo de unos jóvenes a quienes desde el principio se les enseñaba el principio de no sujetarse a su prelado, educados en la obediencia a un canónigo. Y aquí volvía a recurrir al argumento histórico-canónico, tan propio de su personalidad, al afirmar que nadie más que sus respectivos obispos, y menos todavía en la disciplina antigua española —desde el Concilio II de Toledo sin interrupción— había podido tener la dirección de los Seminarios, y ello con exclusión de toda otra instancia. Así, también los religiosos regulares llevaban una vida arreglada y podían enseñar a los jóvenes, pero en punto a Seminarios, los prelados los excluían ⁴² (recordando aquí a San Carlos Borromeo). También, si las Escuelas de Primeras Letras eran inspeccionadas por los ordinarios en punto a libros y doctrina, cuánto más habría de ser en un Seminario sacerdotal. Por todo ello, la cláusula final de la donación de Arcos, en el sentido de que si no se verificaba la exención quedase todo nulo: “Da bastante a entender el espíritu que pudo animar a este eclesiástico en las actuales ocurrencias para dicha fundación en los términos que la propone”.

EL CAMINO DE LA FUNDACION DEFINITIVA

El informe de Rubín —personaje desde luego tan bien relacionado como *necesitado* en las esferas gubernamentales— pesaría como una losa, a nuestro juicio, sobre los iniciales diseños de Arcos.

Y ello aunque el tenor del otro informe solicitado era, por el contrario, enteramente favorable a la petición. Su autor era —por expreso deseo de Campomanes— D. Francisco Gabriel Herranz, oidor de la Chancillería de Granada, Juez para reconocimiento y deslinde, medida y pago de las tierras roturadas en Lorca, y Superintendente

42 Esto mismo había hecho Rubín en Murcia al promulgar sus planes de estudios, terminando con cualquier ascendiente de los regulares sobre la enseñanza de los seminaristas.

de la obra de conducción de agua potable para el abasto de Lorca, entre otros varios asuntos. No es extraño el hecho de que se comisionase a Herranz la toma de informes sobre la cuestión que nos ocupa ⁴³. Al contrario, amén de entenderse que Herranz debió ser hombre de confianza de Campomanes en la plaza, el encargo se correspondía plenamente con la referida supeditación que debió establecerse en la mente del fiscal del Consejo entre el ambicioso proyecto de colonización del campo de Lorca y la viabilidad del nuevo obispado eliocroquense, y por tanto del establecimiento del Colegio que Arcos pretendía.

Como hemos dicho, el tenor del informe de Herranz era plenamente favorable a la nueva fundación. Llegó a poder del Consejo con cierta demora (se tuvo que requerir a Herranz, en 9 de junio para que lo evacuase), el 12 de noviembre de 1779. Certificaba que las tierras eran efectivamente del abad, quien en el intermedio había comprado un olivar más. También le parecía apropiado el emplazamiento de la casa, así como suficiente el caudal de rentas aportado, y juzgaba que la fundación sería muy beneficiosa, sobre todo si era colocada bajo la protección del Consejo y del rey, “con la inhibición de la jurisdicción ordinaria”. Pensaba finalmente el oidor que podrían aplicarse al Colegio las rentas dejadas en testamento por los canónigos de la Colegial, a los que nos referimos al principio. El informe de Herranz iba acompañado por la peritación del valor de los materiales, casas y tierras de Arcos, efectuada por un maestro alarife, un maestro carpintero y un agrimensor, estimándola en un montante total de 542.112 reales y 29 maravedís ⁴⁴.

Por otra parte, el 20 de febrero de 1780, Herranz remitía al Consejo testimonio de que, oídos los síndicos y personero y de acuerdo con el Corregidor y la ciudad (según deliberaciones en cabildo municipal y previo informe personal de Herranz), resultaba que efectivamente la fundación podía ser útil para Lorca, y que en punto a rentas, el hecho mismo del establecimiento efectivo del Colegio podía estimular a otros canónigos para destinar sus fortunas personales a la misma.

Por último, el 17 de abril del mismo año, el apoderado de Arcos ante el Consejo (D. Francisco Cipriano Ortega), presentaba copia testimoniada de los testamentos del canónigo Alcaraz, en apoyo de su iniciativa.

Pasado todo al fiscal, Campomanes ordenó —en 26 de mayo— que todos los informes, incluyendo el del obispo, fuesen remitidos al abad Arcos para que éste expresase su parecer.

El informe de Arcos (sin fecha) debió llegar en los primeros días del mes de septiembre de 1780. Obviamente, expresaba no tener nada que alegar respecto a lo dicho por Herranz y la ciudad, pues le eran favorables. Extendíase por el contrario en formular una dura réplica a la postura de Rubín de Celis.

En primer término —la cuestión era sacada por primera vez a la palestra, de forma explícita, en el expediente sobre el Colegio— Arcos subrayaba que el espíritu que guiaba a Rubín en su informe derivaba del expediente que todavía se seguía en la Cámara entre el propio Rubín, por una parte, y el cabildo y ciudad de Lorca, por otra,

43 Se le pidió que lo hiciese de acuerdo con el Corregidor y ayuntamiento de Lorca, y con audiencia instructiva de los diputados y personero del común.

44 Desglosado así:

— Materiales y casas 171.730 rs.
— Tierras 370.382 rs. 29 mrs.

para erección del nuevo obispado⁴⁵. Tal sería la razón de que el obispo intentase minorar el número total de almas y el montante global de los diezmos. Del mismo modo que intencionadamente minusvaloraba la rentabilidad del capital asignado al Colegio. Así, según Arcos, era notorio que los predios rentarían a la fundación más de 24.000 reales anuales y que, administrados eficazmente, podrían llegar a redituvar al 6% sobre el principal, y no al 3% como decía el obispo.

Además, caso de fundarse el Colegio, los bienes ya anexados bastarían a cubrir al menos la mitad o las dos terceras partes de lo necesario y, llegado el caso, siempre podrían añadirse más rentas, como las sobrantes de la abadía, procedimiento seguido por Belluga y el propio Rubín con respecto al Seminario de San Fulgencio⁴⁶. Resulta claro que, si bien Arcos intentaba coger aquí a Rubín en su propia trampa, no es menos cierto que implícitamente reconocía no ser suficientes las rentas anexadas para el pleno funcionamiento del futuro Colegio, tal y como le imputaba Rubín de Celis.

De todos modos, el abad recordaba que también en el expediente que se seguía en la sala primera del Consejo (iniciado en el Extraordinario)⁴⁷ constaba un informe del predecesor de Rubín en la mitra, D. Diego de Roxas Contreras, en favor de la creación de un Seminario. Y que además, en punto a rentas, podrían agregarse a las cedidas por él mismo, las obras pías de D. Francisco Manuel Liétor y D. Agustín de Laviz, así como los distintos vínculos de los canónigos fallecidos. De forma que, con estas rentas y las devengadas por las propiedades de Arcos, se alcanzaría una cifra no inferior a los 30.000 reales anuales.

Desglosando más aún el informe de Rubín, Arcos consideraba que no era tan importante el riesgo de avenidas, habida cuenta de que se trata de un fenómeno aleatorio y nunca constante. Por lo tanto, bastaría para solucionarlo con dejar a tal efecto un depósito previo a la fundación.

Tampoco era tal el problema de los salarios del Sochantre y del Maestro de Capilla, puesto que estaban ya obligados por su ingreso en la Colegial a dar una hora de lección de canto llano antes del coro y otra hora de canto figurado a los infantillos después del mismo, y ésa sería la única obligación que tendrían siempre, con o sin Colegio. Además, consideraba Arcos que estaban bien pagados, y que si se administraban mal o aumentaban su familia, era cosa propia.

También se hallaban regularmente dotados los estudios mayores, en lo que no se extendió en su proyecto original. Arcos pensaba hacerlo a través de la incorporación de los bienes de D. Rodrigo Coronel, que ya tuvieron este fin cuando existía el Colegio de la Compañía.

En cuanto a que Rubín se negase a ordenar a los colegiales que salieran de la institución⁴⁸ por no tener acceso a controlarlos en el gobierno de la casa, se extrañaba

45 De lo que se deduce que el proyecto de creación de nueva diócesis no fracasó de forma inmediata a la petición de 1772, como parece desprenderse de las referencias bibliográficas citadas anteriormente.

46 Rubín donó en 1778 225.000 reales de su fortuna personal que se invirtieron en la compra de 270 tahúllas de tierra, cuyos productos se destinaron a dotar las cátedras de Derecho Civil que Rubín acaba de establecer en el Seminario de San Fulgencio.

47 Se trata del expediente de creación de Seminario sobre los bienes de los expulsos.

48 De paso, Arcos consideraba impropio de la prudencia y rectitud del obispo el calificarles de vagos e inútiles.

de ello el abad: “Siendo así que admite a Ordenes, y agrega al clero en calidad de asignados a muchos jóvenes, que viviendo en las casas de sus padres, se hallan con la libertad que no tendrán en un recogimiento”.

Sobre la objeción —más grave— puesta por Rubín en el asunto de la inhibición de la potestad episcopal, decía el abad no haber creído ofender tanto al obispo, máxime cuando tal inhibición se produciría en favor del Consejo. Entendía Arcos que Trento creó los Seminarios colocándolos bajo los ordinarios diocesanos en el caso expreso de que se dotasen de las mesas episcopal y capitular o de los diezmos diocesanos, pero no se refirió a los casos en que se fundasen por particulares con bienes propios. Obviamente, el abad hacía aquí una interpretación restrictiva —y diríamos que tergiversada—, bajo prisma economicista, de los vacíos que presentaba el decreto *proseminariis*; frente a la de Rubín, episcopalista en su base y por tanto, defensora de la exclusiva potestad de los prelados sobre el control directo y sin intermediaciones en la formación del clero diocesano. Para Arcos, Trento nunca revocó el derecho común en el sentido de que los fundadores de las iglesias, monasterios, beneficios y Colegios, reservasen el patronato para sí mismos y lo dejasen a su fallecimiento a quien quisieren. El mismo, decía, podía pensar en el lustre de su familia, pero sin embargo entregaba altruistamente el patronato al Consejo. Cosa —dicho sea de paso— que suena más a adulación del Consejo que a posibilidad real de operar de distinto modo.

En este sentido, el abad recordaba las “muchas vicisitudes”, desarreglos y mudanzas propios de los periodos de sede vacante. Evidentemente, el argumento empleado por Arcos era débil, pues si tenía las sedes vacantes —en las que quienes más manejos efectuaban eran los cabildos catedralicios—, no termina de entenderse muy bien por qué tal problema quedaría soslayado eximiendo al Seminario de la jurisdicción ordinaria. Pero si la debilidad canónica del argumento es manifiesta, la verdadera razón la declaraba Arcos de inmediato y se encontraba de nuevo en relación con el intento de establecimiento de la nueva diócesis: lo que en el fondo le espantaba era que *su* Colegio cayese en manos del cabildo de Murcia durante tales periodos.

En cualquier caso, Arcos expresaba sus protestas de no querer otra cosa que hacer viable por cualquier medio un propósito cuya necesidad y buenos fines reiteradamente ponderaba. De ahí que, en conclusión, se plegase enteramente a la decisión que tomase el Consejo. Más concretamente, y para contentar al obispo, llegaba a proponer que:

“Se conformará, siendo del agrado de este Tribunal Supremo (quedando el Colegio siempre bajo de su sabia dirección, como principal patrono), se le conceda al Reverendo obispo de Cartagena, y a sus sucesores, que hallándose en visita pastoral en la expresada ciudad de Lorca por sí mismo, pueda hacerla de dicho Colegio, sus individuos, observancia de sus Constituciones, y demás conveniente para que se solicite el remedio; pero esto no se permita a cualquier otro visitador de sede plena, o vacante”.

Y terminaba su informe recordando que en la misma sala de Gobierno del Consejo obraba el expediente iniciado en el extraordinario por representación de la ciudad y Colegio de Lorca solicitando crear en ella un Seminario Conciliar en el Colegio de la Compañía. Podríamos pensar que esta mención suponía un cierto paso

atrás o un cambio cualitativo en las iniciales posiciones de Arcos, puesto que podría ocurrir —como ocurrió— que ambos expedientes (el de su Colegio y el del Seminario) se uniesen, y de ello resultase perjuicio para los planteamientos iniciales que reseñamos. Pero, al contrario, más bien creemos se trataba de un paso más en su estrategia, que entrañaría crear un Seminario sobre la fundación, y por ende, el mantenimiento de las reservas que pretendía. En otras palabras, la asunción de un riesgo calculado.

El expediente fue pasado al fiscal el 11 de septiembre de 1780, casi año y medio después de la inicial petición de Arcos. Este, en primer lugar, decretó que en efecto se uniese el expediente referido al antiguo Colegio de la Compañía (el 17 de noviembre siguiente), pero aún se demoró bastante antes de tomar una decisión: su informe sobre el particular lleva fecha de 27 de agosto de 1781.

Campomanes comenzaba ponderando el celo del abad y su generosidad al querer fundar el Colegio, así como la conveniencia del mismo. Esta se hallaba justificada desde la considerable extensión y vecindario de Lorca y su término, tanto en el caso de que efectivamente se erigiese en obispado (como en efecto se trataba de hacer en el momento presente, y en tal caso sería preciso desde luego crear un Seminario Conciliar); como si no, pues como Trento mandaba, siempre convenía que en las diócesis numerosas hubiese una o más de estas instituciones. Máxime cuando al Consejo —como protector del Concilio— le correspondía velar por la erección de Seminarios.

Obraban también a la vista del fiscal los autos pendientes en el Consejo para la erección del Seminario Conciliar en Lorca en la antigua casa de la Compañía, y recordaba que a las propuestas lorquinas el fiscal propuso en 24 de noviembre de 1772 —como dijimos— que se les diese curso en atención a la conveniencia de crear el Seminario ⁴⁹.

Sin embargo, Campomanes estaba lejos de tomar una resolución definitiva en el asunto. En primer lugar, a juicio del fiscal el abad no satisfacía las dudas planteadas por Rubín de Celis acerca de la mala salida profesional de los colegiales y el espíritu de independencia hacia el prelado en que se formarían. Cuestión tanto más importante en el momento puesto que el obispo era la pieza clave y nexo privilegiado por el Consejo en una tarea —como la de la formación y el control ideológico sobre el clero diocesano— que a la sazón podemos considerar como auténtico asunto de Estado.

Y en segundo lugar, Campomanes entendía que tampoco la cuestión de las rentas se hallaba plenamente resuelta. En cuanto a los vínculos (aunque sólo mencionaba el de García de Alarcón), le parecía aún lejano el tiempo en que se extinguirían todas sus líneas, y problemática su incorporación cuando ello se produjese. Sería necesario, por tanto, que al menos la ciudad de Lorca proporcionase algunos arbitrios (como ya hizo en 1770), uniéndoles las rentas donadas por Arcos Moreno.

Pero con todo, es evidentísimo que Campomanes seguía ligando la viabilidad económica y efectiva del Colegio todo al resultado futuro de la empresa de colonización del campo de Lorca. En esto Campomanes era —o pretendía mostrarse— optimista. De ahí que indicase que en el día se estaban concluyendo las diligencias relativas al derecho de roturas por el ministro comisionado del Consejo, Herranz, y de ellas resultarían considerables cantidades sobrantes, luego de acabada la conducción de agua dulce a la ciudad.

49 Vid. nota 20.

Entonces sería el momento para tratar mejor de la erección del Colegio contando con rentas fijas y seguras. Entretanto, proponía que la cesión de los bienes de Arcos en favor de la Colegial para el colegio de *cantores*, “la redujese a disposición del Consejo para formación del Seminario Conciliar”, reconociéndole expresamente sólo el derecho a la presentación de seis becas para sus parientes o personas de su designación. Tal sería el medio más seguro de *perfeccionar* la fundación del Seminario en lo económico, respetando al máximo simultáneamente los designios de Trento, el mérito de la Colegial y los propios deseos del fundador.

Pasado el expediente al relator en 3 de septiembre, el Consejo envió a Arcos en 18 de junio de 1782 una carta en la que le manifestaba su satisfacción por el celo manifestado y le expresaba —de acuerdo con el dictamen fiscal— que esperaba que la cesión hecha de sus bienes al cabildo la redujese a disposición del Consejo para la formación de un Seminario Conciliar, con la reserva explicitada. A dicha propuesta, ante las dilaciones que se venían experimentando y lo ya comprometido, contestó de inmediato Arcos expresando su conformidad en 27 de junio.

Poco después, el 17 de agosto, y en el mismo escribano ante el que efectuó la cesión de sus bienes a la Colegial, Arcos compareció para otorgar escritura de cesión y traspaso de todos sus bienes raíces, muebles y semovientes, así como los productos de su abadía (reservándose sólo lo preciso para sus alimentos y 3.000 reales en favor de determinadas personas), en favor del Consejo de Castilla, “para que *sin limitación alguna* pueda fundar, y erigir en esta ciudad un Seminario Conciliar a favor de los naturales de ella y su Diezmatorio”⁵⁰.

Tanto Arcos como Rubín de Celis morirían antes de que el Colegio entrase en funcionamiento. El 8 de octubre de 1783 comparecían ante el mismo escribano los miembros del cabildo de la Colegial nombrados por Arcos para el efecto, comunicando la muerte de Arcos —ocurrida en 2 de septiembre—, a fin de renovar el poder que tenían sus representantes ante el Consejo. El testamento del mismo, otorgado el 1 de enero de 1783, dejaba en limosnas prácticamente todo aquello que no hubiese cedido al Consejo, pedía un entierro digno en el panteón de la Colegial con el único acompañamiento de los capitulares, y en cuanto al Colegio, designaba quiénes serían los colegiales becados de entre su propia parentela. También nombraba una junta de canónigos para administración de sus bienes, si el Consejo no hallaba inconveniente. Para el nombramiento de sus becas reservadas una vez muerto, designaba elector a D. Pedro Pérez de Meca, regidor perpetuo de Lorca, y a los sucesores en su mayorazgo. Pero lo más significativo del testamento era la petición de Arcos en el sentido de que en materia de admisión de colegiales y visitas de la institución (salvo el obispo en los casos citados),

50 El subrayado es nuestro. Arcos suplicaba se tuviesen en cuenta algunas peticiones personales, tales como: poder usar de la casa (muy adelantada en su construcción) como vivienda propia sin perjuicio de los colegiales; que los estudios no fuesen sólo de canto y música, sino que también incluyesen la latinidad y las facultades mayores que permitiesen los fondos y rentas, aunque siempre respetando el servicio diario a la Colegial; y que si muriera antes de crearse efectivamente el Colegio, el abad sucesor y el cabildo se hiciesen cargo de todas las existencias de frutos y de materiales para la obra, bienes muebles y semovientes de su propiedad, administrándolos siempre con comunicación al Consejo. Indicaba igualmente que había recibido el pleno apoyo del cabildo colegial para la cesión, que los bienes se encontraban bastante acrecidos, que el título y el hábito de los colegiales podría ser variado por el Consejo, y que aceptaba las seis becas que el Consejo le asignaba, dejando las restantes a disposición de éste. En ningún caso se aludía a exenciones en relación con el prelado.

sólo se hallase facultado el cabildo de la Colegial, aunque informando siempre al Consejo. Es decir, Arcos —quien efectuó la cesión *sin limitación alguna*— pretendía a través de la solemnidad de su última voluntad introducir de nuevo las iniciales reservas en dichas cuestiones.

La cesión fue muy positivamente valorada por el fiscal del Consejo. En su informe de 10 de enero de 1784, quedaba claro que la anterior iniciativa de creación del Seminario había quedado detenida por falta de fondos, y que sólo ahora —con la donación de Arcos más algunas otras pequeñas partidas donadas por la ciudad y la Colegial⁵¹— podría por fin llevarse a efecto. Razón por la cual recomendaba al Consejo aceptar la cesión para que, de acuerdo con los testamentarios, se procediese sin más dilación a establecer el Colegio. Ahora bien, nada decía con respecto a reservas relativas a las competencias del obispo. Al contrario, se indicaba que sería precisamente éste el principal encargado del negocio, con lo que hemos de entender que el fiscal —por un elemental principio de coherencia regalista— en modo alguno asumía que se estableciesen aquéllas.

Aceptada la cesión por el Consejo en 1 de abril de 1784, el proyecto se encontró por fin en el tramo final de su realización. El primer paso fue la entrevista de los testamentarios con Rubín de Celis, quien —con seguridad aplacado por la actitud del fiscal en lo tocante a su jurisdicción—, se mostró en todo favorable aunque les solicitó algún tiempo para ponerse debidamente al corriente del estado del asunto.

Y aunque poco después (el 9 de agosto de 1784), fallecería el obispo, a tales alturas del proceso los lorquinos estaban decididos a fundar el Colegio sorteando cualquier escollo. De modo que pidieron que todo siguiese adelante, incluso si ello implicaba que tuviera que encargarse el vicario capitular.

Bien es cierto que entre agosto de 1784 y julio de 1786 no tenemos datos del estado del expediente. Fue en 21 del último mes cuando (habiendo solicitado los testamentarios fundar el Seminario sin citación del cabildo de Murcia ni demás requerrimientos, sino con la sola intervención del abad y testamentarios) se produjo un informe del nuevo obispo de Cartagena, D. Manuel Felipe Mirallas⁵².

¿Cuál fue la causa de este nuevo problema y de la actitud de los testamentarios? No se desprende claramente de la documentación existente. Pero hemos de entender que con seguridad jugaría aquí la nueva demora, de prácticamente dos años, que volvía a experimentar el expediente. En cualquier caso, el problema de fondo que seguía —y seguiría existiendo— venía dado por la dificultad de conciliar los intereses del bloque reformista con la iniciativa de Arcos y los lorquinos, máxime cuando el testamento del abad abría una nueva brecha para introducir la casuística en relación con la cesión. En este punto concreto del expediente, dicho problema se planteó en torno a si el Colegio tendría o no la consideración de Conciliar. Como se ha visto, el giro últimamente tomado por el expediente en el Consejo apuntaba a concederle tal estatuto, y la cesión de los bienes de Arcos se hizo precisamente para la creación de Seminario Conciliar. Pero en tal caso, era muy dificultoso —desde el punto de vista canónico— respetar las

51 7.000 reales de las obras pías ya referidas más 1.760 de los propios de la ciudad destinados a enseñanza de primeras letras y latinidad.

52 Mirallas fue proclamado obispo de Cartagena en 27 de junio de 1785, e hizo su entrada en Murcia en 18 de septiembre de mismo año. Allí moriría en 15 de junio de 1788.

reservas formuladas por Arcos en su testamento. Por ello, tanto Mirallas como el fiscal del Consejo (en un nuevo informe de 6 de diciembre de 1786), de acuerdo con los testamentarios, propusieron prescindir del trámite y título de Conciliar, entendiendo que se trataba simplemente de un Colegio para jóvenes sobre el que no obraba lo dispuesto por el decreto *proseminariis*. Pudo pasarse así, por fin, a la redacción de los estatutos y la apertura del Colegio.

LAS CONSTITUCIONES DE 1788

Los estatutos del nuevo Colegio estarían finalmente concluidos en 14 de octubre de 1787, formados por D. Pablo Antonio Martínez, Gobernador del obispado.

Una carta del mismo Martínez de la misma fecha explicaba la situación en que se hallaba la fundación. En 15 de mayo de ese año ya se encontraba concluida la casa y habitaciones para rector, ministros y 80 colegiales (número mucho más ambicioso que el inicialmente previsto). En cuanto a los productos de la hacienda del abad, ascendían a 77.538 reales y 27 maravedís en los últimos 4 años. Es decir, 19.384 reales y 23 maravedís anuales, más otros 7.000 de las otras contribuciones, sumando un total de 26.384 reales y 23 maravedís anuales para dar principio al colegio. Una estimación que si no era tan pesimista como la de Rubín, tampoco alcanzaba las más optimistas de Arcos y los lorquinos. Se habían experimentado otras dificultades, principalmente derivadas de la mala salud que en los últimos tiempos de su pontificado sufrió el obispo Mirallas, de modo que si los testamentarios insistían en la urgencia y necesidad de abrir la casa de inmediato —y así se lo pidieron al obispo—, ello no había podido ser por las “notorias indisposiciones” de éste. De ahí que fuese D. Pablo Antonio Martínez quien se encargase de redactar los estatutos.

A la hora de glosar su contenido, Martínez indicaba que no había incluido estudios de primeras letras, por los múltiples perjuicios que causarían niños de muy corta edad en el Colegio, aunque se brindaba a adicionarlos si el Consejo lo estimaba conveniente. Tampoco alcanzaban las rentas para dotar los de filosofía y teología escolástica y moral, aunque era “gravísima” la necesidad que de ellos había en Lorca. Pero en cambio sí habían quedado incluidos en los estatutos porque el abad actual —Manuel Robles Vives— dotó por escritura pública 200 ducados para la enseñanza de filosofía, y el Magistral y el Lectoral, más otros cuatro eclesiásticos “literatos” se habían comprometido a regentar voluntariamente las de teología. Se esperaba además —y todavía— que pronto las rentas del Colegio de la Compañía y del presbítero D. Rodrigo Pérez Coronel pasasen al Colegio.

El fiscal del Consejo, en 22 de septiembre de 1787, se mostró conforme en todos los puntos, salvo en que las cátedras de filosofía y teología comenzasen a impartirse, estimando que lo principal por el momento era ampliar el número de gramáticos y retóricos. Hemos de entender que esta postura era congruente con la decisión acerca del estatuto que había de tener el Colegio: al no ser declarado Conciliar, no se desearía establecer precedentes en tal dirección, como podría interpretarse en un futuro en el caso de que estas cátedras entrasen en funcionamiento.

Las Constituciones remitidas por Martínez fueron finalmente aprobadas por

Real Provisión de 22 de diciembre de 1787, e impresas en Murcia al año siguiente ⁵³.

El resultado final de las largas gestiones acerca del carácter que habría de tener el Colegio se refleja de entrada en las Constituciones. Quedaba claro en ellas que el Colegio se erigía sin el concepto de Conciliar, sobre la casa ya construida y dotado con las haciendas y predios del fundador y el cabildo ⁵⁴, “debiendo estar siempre dicho Colegio baxo de nuestra dirección (*del obispo*), filiación y obediencia, y de nuestros sucesores en la dignidad Episcopal, como que es un plantel de donde hemos de destinar Ministros a la Iglesia” ⁵⁵. Esta directa dependencia respecto del obispo quedaba justificada a través del argumento ya empleado por Rubín de Celis, por la necesidad de conocer la doctrina que se enseñaba a los colegiales y sus antecedentes personales cara a la ordenación sacerdotal. Se llegaba así a una fórmula mediante la cual respetar la plenitud de la potestad episcopal sobre la formación y selección del clero sin necesidad de ajustarse al texto del decreto *proseminariis*. Claro que esto, desde una interpretación abierta e implícita, proporcionaría más adelante a los lorquinos la ocasión para intentar introducir en el momento propicio una casuística que les fuera favorable. La suprema protección, en todo caso, correspondería al Consejo de Castilla.

En cuanto a su estructura jerárquica, el gobierno del Colegio estaría fundamentalmente a cargo de un rector y un vicerrector. El primero habría de ser un sacerdote de vida ejemplar y suficiente literatura para gobernar el Colegio en las cosas espirituales y temporales, observando y haciendo observar las Constituciones, castigando las faltas e informando de todo al prelado. Sería elegido siempre por el ordinario diocesano, aunque procurando que fuese miembro del cabildo de la Colegial. Por su parte, el vicerrector sería elegido como el rector, y sería su sustituto en caso de ausencia, enfermedad u ocupaciones de éste. Estaría obligado, al contrario que el rector, a vivir siempre en la casa.

Existiría también un capellán que ayudaría al rector en el gobierno espiritual, y que diría misa diariamente, asistiría a la oración mental, rosario y demás ejercicios espirituales.

En cuanto a la administración económica, se disponía que continuase la junta de capitulares testamentarios, bajo las órdenes del obispo y sus sucesores. Nunca serían más de 3 incluyendo al rector, siendo elegidos por el obispo a propuesta del cabildo. A la misma junta correspondería proponer un lego competente para el oficio de mayordomo, cuyas funciones serían las propias del cargo ⁵⁶.

53 En la imprenta de la viuda de Felipe Teruel, Lencería, 88 p. en 4º. El impreso incorpora también la representación de Martínez de 14 de octubre de 1787: *Constituciones del Colegio de la Purísima Concepción de Lorca, Obispado de Cartagena, que siendo prelado el Ilmo. Sr. D. Manuel Felipe Mirallas, dispuso, y ordenó el señor D. Pablo Antonio Martínez, Gobernador en lo espiritual y temporal, Provisor y Vicario General de dicho Obispado* (consta un ejemplar en el expediente utilizado, y otro en la Biblioteca Municipal de Murcia).

54 Es decir, 19.000 reales más los 7.000, de las obras pías de D. Agustín de Laiz y D. Francisco Manuel de Liétor.

55 *Constituciones...*, p. 22.

56 Explícitamente, recaudar, cobrar y percibir todos los caudales, rentas, frutos, alimentos de porcionistas y demás; llevar cuenta formal con cargo y data rendida anualmente; tener recaudados todos los créditos pertenecientes al Colegio dentro de los 30 días posteriores al plazo de su pago; hacer las prevenciones de cocina y despensa, anotando el gasto diario efectuado por el comprador, rindiendo cuentas a fin de mes al rector; y conservarlas en su poder para la junta general que rendiría cada día 8 de febrero, cuya cuenta remitiría finalmente al obispo para su aprobación.

Finalmente, se contaría con portero, dispensero y refitolero sujetos al rector ⁵⁷, así como un cocinero y comprador que daría cuenta al mayordomo de lo comprado y pediría orden del rector para lo que hubiera de comprar cada día.

Esta sencilla estructura institucional era trasunto de la existente en el Seminario de Murcia y por supuesto nada innovadora. Lo más destacable en ella resultaba, sin duda y como se ha dicho, de la estrecha sujeción del nuevo Colegio a la potestad episcopal, a pesar de las concesiones hechas a los lorquinos.

Hecho que igualmente se observaba en materia de estudios; esto es, en el plano ideológico. Dada la integración que se pretendía en la red de enseñanza clerical diocesana, que tenía al Seminario de San Fulgencio por cabeza, se mandaba que se observase literalmente el plan establecido por Rubín de Celis para el Seminario murciano en 1774 ⁵⁸ en cuanto fuese adaptable, e incluyendo las cátedras de gramática y retórica. Así, el maestro de estas materias que mantenía el ayuntamiento de sus rentas de propios habría de trasladarse al Colegio. Enseñaría a becarios y porcionistas del Colegio y a los demás hijos de vecinos del pueblo en los mismo días y horas en que ya lo venía haciendo. Caso de que por cualquier razón el traslado no se llegase a verificar, se establecería una cátedra del mismo título pero sólo para los colegiales, asignándosele por salario el que correspondiese en el juicio del rector y la junta, y permitiese el estado de los caudales ⁵⁹.

Pese al dictamen del fiscal en sentido contrario, en los Estatutos impresos —al igual que en el manuscrito original— se incluyeron las enseñanzas de filosofía y teología escolástica y moral. Estas materias quedaron provisionalmente establecidas, atendiendo a los deseos del fundador, con la dotación de 200 ducados aportada por el abad hasta que se instituyesen las cátedras de Pérez Coronel. El titular sería nombrado por el obispo a propuesta del abad. En cuanto a las cátedras de teología escolástica y moral, los Estatutos hacían referencia al compromiso gracioso del Magistral, Lectoral y demás clérigos, que quedaba aceptado, instituyéndose las cátedras (2 de escolástica y 1 de moral, más las pasantías que se juzgasen convenientes, para beneficio de los colegiales y todos los hijos de vecinos de Lorca). Este compromiso y dotación cesaría cuando se produjese la incorporación de las cátedras dotadas con los bienes del licenciado Coronel.

Finalmente, las enseñanzas de canto llano, ritos y cálculos seguirían, como hasta ese momento, a cargo del Sochantre y Maestro de Capilla de la Colegiata, según les obligaban las Constituciones de la Colegial de 1720, pero pasando a impartirse en el Colegio.

En cuanto al número de colegiales y ciclo de permanencia en la institución, se distinguía en primer término entre becas de gracia y porcionistas. En cuanto a las primeras —y en tanto no se regulasen los caudales—, sólo existirían 12 becas, 6 pagadas con la renta del fundador y otras 6 con la ayuda para obras pías del cabildo. El obispo se reservaba aumentar o disminuir el número de estas últimas según evolucionasen las rentas. Condición necesaria sería la de ser naturales de Lorca y pobres. En cuanto a las

57 De momento, estos cargos serían ocupados por una misma persona.

58 Sobre los textos del plan de filosofía y teología (Jacquier, Juenin, Berti y Concina), *vid.* MAS, C., "De la Ilustración al liberalismo...", *cit.*, pp. 113-115.

59 Más adelante veremos que este traslado no se llegó a verificar.

6 de Arcos, también necesitarían —para la concesión— de licencia *in scriptis* del obispo, pero igualmente era necesario ser de Lorca y su diezmatorio ⁶⁰. Tendrían 10 años cumplidos, serían examinados para el ingreso en doctrina cristiana, lectura y escritura (para la gramática); en gramática, prosodia y retórica para filosofía; y de todo ello y la filosofía, si pretendían ingresar directamente al estudio de la teología. También habrían de justificar limpieza de sangre y nacimiento (hasta sus abuelos), así como honestidad de vida y costumbres al igual que se practicaba en San Fulgencio. Las informaciones se harían ante el vicario de Lorca o el rector, y se guardarían en el archivo del Colegio.

En cuanto a los porcionistas, serían admitidos todos los que quisieren instruirse, pretendiesen el estado eclesiástico y admitiese el obispo. Practicarían igualmente información de ingreso, y pagarían sus alimentos por tercios anticipados (a razón de 4 reales diarios). Si el pago se retrasase en más de 15 días, serían expulsados en caso de no existir esperanza cierta de cobro.

Respecto a la permanencia, quedaba establecido un ciclo de 12 años para las becas de gracia si comenzaban por el estudio de la gramática (2 de gramática, 1 de retórica, 3 de filosofía, 4 de teología escolástica, y 2 de moral, incluyendo las materias de rúbricas, ceremonias, Sagrada Escritura, cómputos, Historia de la Iglesia, práctica de la predicación y explicación de la doctrina), 9 años si eran ya retóricos, y 6 si filósofos. Podría darse algún mayor plazo de permanencia si fuese útil para servir los ministerios del Colegio, pero siempre con la aprobación del obispo. Los porcionistas podrían estar el tiempo que quisieren mientras pagasen sus alimentos. Las asistencias comprenderían ración diaria de 2 libras de pan, 11 onzas de carne (sin vino), y habitación. Cada uno de los colegiales (becas y porcionistas) traería 2 sillas, mesa, cama, velón y demás útiles para su comodidad, sin vanidad ni ostentación, prohibiéndose expresamente los cuadros y las alhajas.

Los demás títulos de las Constituciones se dedicaban a regular aspectos tales como la vida interior, organización... Respecto de estas cuestiones reseñaremos únicamente lo dispuesto sobre el servicio a la Iglesia: se entendería que éste se prestaría sólo a la Colegial, inexcusablemente en los días solemnes y festivos (al igual que los fulgentinos). Pero el resto de los días, si hubiese acólitos suficientes, los colegiales quedarían dispensados ⁶¹.

Constan también en el impreso los nombramientos de los primeros cargos del Colegio, confirmados en Murcia en 11 de abril de 1788. El propio abad, Manuel Robles Vives, asumía el rectorado. Vicerrector y capellán serían dos presbíteros (Antonio García Xerez, Magistral; y Domingo Navarro Casete, Lectoral). También se indicaba que habían sido otorgadas las escrituras y obligaciones para cubrir las cátedras de filosofía y teología (por parte de los presbíteros Pedro García Alexandre, cura

60 Por pobres, según la acepción comúnmente aplicada en la época, se entendían aquellos que “aunque tengan algunos medios para su precisa manutención, no son bastantes para poner y mantener a sus hijos todo el tiempo necesario de la carrera de los Estudios, hasta conseguir el estado Eclesiástico a que aspiran”. (*Constituciones*, p. 44). Quedaban formalmente excluidos los hijos de mendigos miserables, justificado porque no podrían llegar a darles ni tan siquiera el vestido y los libros que precisaban, a no ser que alguien, mediante escritura ante notario, se comprometiese a hacerlo.

61 Teniendo presente el ejemplo del Seminario de San Fulgencio, esto supone una manifestación más del triunfo de las tesis episcopales.

de la Colegial; José Fermín Mancebo, cura de Santa María; D. Lorenzo Alonso, de la de Santiago; y D. Francisco Alemán). Los demás nombramientos serían efectuados en su momento.

EL COLEGIO DE LA PURISIMA ENTRE 1788 Y 1820

Lamentablemente, la documentación manejada no nos permite entrar a fondo en lo que fue la vida de la institución desde el momento fundacional, incluyendo aspectos tan relevantes como pueden ser los del curso seguido por las enseñanzas, la nómina y el número de profesores y alumnos, o el esbozo de la evolución ideológica, entre otros muchos. De ahí que debamos limitarnos, al intentar una aproximación a su realidad en este tramo final del Antiguo Régimen, prácticamente a referir los datos más o menos hilvanados que tuvieron entrada en el Consejo de Castilla.

Como era previsible, pronto surgió el primer problema causado por una sede vacante. Muerto el obispo Mirallas en 15 de julio de 1788, entre ese momento y el mes de octubre inmediato se desarrolló una fuerte polémica, incluyendo apelaciones al Consejo. Así, el 23 de julio el cabildo de la Colegial solicitaba al Consejo se le respondiese quién habría de tener la potestad de gobierno, deseando evitar polémicas con Murcia, a fin de proveer el nombramiento de colegiales para el siguiente curso. La razón residía en que el día antes el deán y cabildo de Murcia habían procedido a nombrar rector. Poco importaba que el designado fuese el propio Robles —salvo en que la polémica discurriese de forma relativamente pacífica—, pues lo que desde Lorca se ponía en tela de juicio era el propio derecho del Cabildo catedral de Murcia para nombrar rector, con independencia de quién se tratase. Los lorquinos alegaban que las disposiciones de la dotación y testamento de Arcos hacían que el cabildo de Murcia no entendiese en caso de sede vacante sobre el Colegio. Desde Murcia se repuso —con plena justicia canónica— que tanto en virtud de las Constituciones como del Tridentino, el nombramiento del rector recaía en su Cabildo porque todas las atribuciones del ordinario les tocaban en sede vacante. El fiscal, en 8 de octubre de 1788, y el Consejo (en 22 de octubre), reconocían la validez de lo último. Pero también indicaban que era necesario respetar las disposiciones de Arcos (dándolas por aceptadas al recibir la cesión de sus bienes), razón por la cual el Seminario no era Conciliar. De modo que se falló en favor de Lorca, porque —se dijo— las facultades del prelado dimanaban de la dotación y no de los cánones (y en este caso la dotación le era ajena).

Es evidente que con esta decisión el Supremo Tribunal quebrantaba su anterior línea argumental, manifestando explícitamente (cosa no hecha hasta entonces) que al aceptar la cesión quedó vinculado por las reservas contenidas en el testamento de Arcos. Parecía, pues, que el difunto abad había ganado finalmente su particular batalla desde la tumba. Sin embargo, y salvando lo que ello podía suponer como precedente, la trascendencia del asunto no puede magnificarse. A fin de cuentas, las atribuciones del obispo quedaron ampliamente salvadas —mucho más allá de lo que Arcos hubiese querido— en las Constituciones. Igualmente, los períodos de sede vacante eran excepcionales en el ejercicio de la jurisdicción ordinaria. Pero lo que creemos pudo hallarse en la base de todo fue la necesidad que el reformismo gubernamental tuvo siempre de pactar —en tantos terrenos, incluyendo el de la enseñanza superior— con las fuerzas

representadas por los poderes y oligarquías locales: no en vano, en esos mismos momentos la gestión del Comisionado Robles Vives (hermano del abad ⁶²) estaba levantando las suficientes ampollas en la ciudad como para evitar a toda costa producir más enfrentamientos precisamente con el cabildo de la Colegial, a la sazón el más importante propietario de aguas en Lorca.

Al margen de este asunto, el problema económico siguió gravitando sobre el Colegio. En el expediente consta una carta del rey al Corregidor de Lorca de 21 de junio de 1789, en la que se expresaba que en 26 de julio de 1788 los apoderados testamentarios pidieron al ayuntamiento de Lorca concediese el número de fanegas de tierra inculca que le pareciese en el territorio comprendido entre los ríos Vélez y Luchena. El ayuntamiento señaló 400 fanegas el 24 de abril de 1789 para que, puestas en cultivo, se utilizasen sus productos a beneficio del Colegio, mediante escritura y aprobación del Consejo. Las becas que resultasen serían de libre patronato de la ciudad, decidiéndose que en principio sólo fueran tres. El rey pidió informe de los diputados y personero del común sobre los beneficios o perjuicios de la cesión de estas 400 fanegas. El informe fue totalmente favorable ⁶³, así como el de D. Ginés Nicolás Moya, Corregidor interino por muerte del titular ⁶⁴. El fiscal y el Consejo ⁶⁵ lo aprobaron todo, siendo la donación de cesión y perpetua donación, otorgada por el ayuntamiento de Lorca en 29 de abril de 1790 ⁶⁶.

También desde 1788, y siempre en relación con la cuestión de las rentas, quedó formado en el Consejo un nuevo expediente a instancias de la ciudad de Lorca demandando que para dotación del Colegio de la Purísima se aplicasen las rentas del présta-

62 En este sentido, cabría interrogarse acerca del papel desempeñado por el hermano del Comisionado, el abad Manuel Robles Vives, en este entramado de intereses conflictivos. Teniendo presente que la abadía de la Colegial (obviamente), era de presentación real, no sería descabellado pensar que D. Manuel pudo actuar como elemento favorable al reformismo, o al menos como intermediario moderador. En cualquier caso, Robles fue consultado por la Cámara en primer lugar para la abadía —como canónigo más antiguo de ella— en 17 de marzo de 1784, mereciendo la aprobación del P. Confesor, D. Joaquín Eleta. No deja de ser significativo que en 20 de enero del mismo año, el propio Rubín de Celis dirigiese una carta al rey recomendando a Robles en términos harto elogiosos: “Sujeto de muy distinguido mérito y literatura, de edad de cuarenta y cinco años, natural de la misma ciudad, y dotado de cuantas prendas son apetecibles de virtud, prudencia y conocimiento del gobierno de la Iglesia, para desempeñar bien la presidencia del cabildo... Su celo en la predicación, que ha desempeñado con aplauso en cumplimiento de las obligaciones de su prebenda, puede ser aún más fructuoso ocupando la primera silla... Me consta, Señor, que el cabildo le apetece, y que el pueblo le desea por su ardiente caridad con los pobres”. De paso, Rubín —como hábil maniobrero— no dudaba en deparar toda clase de parabienes para el tiempo del abad anterior, aunque siempre dejando clara su jurisdicción: “El gobierno interior de la Iglesia, el buen orden de ella, la armonía entre sus capitulares, su ejemplo hacia el clero y el pueblo, y la observancia de la disciplina en todas sus partes, ha sido en tiempo del difunto abad tan a mi satisfacción, que me obliga a redoblar mis deseos por la conservación de tan preciosos dones en un cuerpo eclesiástico sujeto a mi jurisdicción”. (Archivo General de Simancas, *Gracia y Justicia*, leg. 325 antiguo).

Sobre la familia Robles Vives, *vid.* el trabajo monográfico que le ha dedicado HERNANDEZ FRANCO, Juan: “Una familia de la ‘nueva clase’ política del siglo XVIII: los Robles Vives”, *Cuadernos de investigación histórica*, n.º 11 (Madrid), 1987, pp. 131-152.

63 En 24 diciembre de 1789.

64 En 18 febrero 1790.

65 En 17 de marzo y 22 abril de 1790.

66 En 1790 se suscitó un nuevo problema: las Pías Fundaciones, cuyo Juez Protector era el Marqués de Roda, consideraron que parte de las 400 fanegas estaban en el territorio que se les donó en 1712. No se sabe el resultado, aunque este expediente sigue hasta 1793.

mo de la parroquia de San Clemente de la misma Lorca que en virtud de bula pontificia disfrutaba el Colegio de Santa Catalina de Cuenca ⁶⁷. Realmente, el proceso era anterior, y la intervención de la ciudad en favor de reintegrar el préstamo de San Clemente fue tan activa que provocó un expediente separado en la Cámara a petición del síndico personero de Lorca. Con el apoyo del obispado, se tomó declaración a todos los párrocos de la ciudad, vinculándose así el asunto a una petición de éstos, con licencia del prelado, para que se procediese a solicitar la unión de los beneficios simples a sus curatos respectivos. Comenzada la información en 8 de noviembre de 1786, y concluida en agosto de 1790, todos los curas insistían en las pocas rentas, extensión de las parroquias y gran número de feligreses a atender, la falta de atención pastoral y la necesidad de contar con tenientes de cura. Por todo ello pedían se agregasen a los curatos los beneficios simples que se sacaban fuera de la diezmería, y que poseían sujetos que en nada conocían las necesidades ⁶⁸. También apoyaba el expediente ante el Consejo, cara a su justificación desde el punto de vista de la demanda educativa, un certificado de Juan Tomás Manchón, catedrático de latinidad de la ciudad de Lorca en la Real Casa de San Agustín —antiguo Colegio de la Compañía—, fechado el 20 de enero de 1790. Según Manchón, había en Lorca 109 estudiantes de diversas clases. El mismo había insistido en repetidas ocasiones para que al menos se le pusiese un repetidor para los mínimos. Como quiera que el resultado de sus peticiones había sido nulo, se veía precisado a tolerar que —contra las leyes del reino— hubiese tres individuos que sin aprobación se hallasen enseñando, cada uno en su respectiva casa, y con diverso método ⁶⁹.

La postura del obispo de Cuenca —D. Felipe Antonio Solano—, expresada en 3 de noviembre de 1788, no era totalmente negativa, aunque de forma velada amenazaba con que, caso de concederse a Lorca lo que pedía, habría de hacerse lo mismo con las piezas eclesiásticas del obispado de Cuenca que contribuían a dotar Colegios y conventos fuera de él ⁷⁰.

Por razones que desconocemos, el asunto quedó detenido aun cuando se solicitó desde el Consejo informe al nuevo obispo de Cartagena, D. Victoriano López Gonzalo, en 4 de junio de 1790. López no remitió informe a la Cámara hasta el 11 de febrero de 1793.

Como ocurriera con el de Rubín, este informe se encuentra plenamente en línea con la mentalidad de este prelado, otro característico ejemplo de los obispos *jansenistas* españoles del momento ⁷¹. Apoyado en una larga exposición histórico-canónica, el obispo daba cuenta de todo el proceso que hizo por progresivas segregaciones la

67 “Lorca y Cuenca, 1788. Expediente formado en virtud de la Real Orden de Su Majestad con la que se remitió a consulta del Consejo una representación y varios documentos de la ciudad de Lorca sobre que en consideración a la falta de enseñanza pública que hay en ella, se pongan cátedras de gramática, retórica, filosofía y teología en el Colegio de la Concepción nuevamente fundado...”.

68 Una de las consecuencias de este expediente fue la creación de la parroquia del puerto de Águilas, ordenada por el rey en 4 de marzo de 1787.

69 Prueba —como dijimos— de que no se habían incorporado al Colegio.

70 Según consta en el expediente, el Colegio de Cuenca tenía sólo 32 colegiales gramáticos, todos internos, manteniéndose sólo del referido beneficio. Como quiera que se hallaba amenazada la subsistencia del Colegio, se ordenó visita por el Corregidor de Cuenca, aún en la tardía fecha de 1798.

71 Sobre López Gonzalo, *vid.* MAS, C.: “De la Ilustración al liberalismo...”, *cit.*, pp. 142-161.

renta decimal correspondiente originalmente a las siete parroquias de Lorca⁷² hubiese quedado reducida a un tercio de la que en principio les correspondía⁷³. Le parecía además particularmente repugnante —y ello le hacía pasar por encima de cualquier bula, ley o norma— y desacorde a los cánones, que se separase la función del beneficio, máxime cuando aquélla era la cura de almas. La aplicación a Cuenca, quizá saludable en su momento, cuando no había entonces estudios allí, había quedado ya desnaturalizada, pues el Colegio de San Julián de la misma disponía de 4 cátedras de gramática. La situación era tanto más deplorable para el obispo por cuanto —siendo diezmos pagados por los lorquinos— Lorca contaba en su demarcación con más de 7.000 familias, y los párrocos apenas tenían para vivir, sin apenas percibir diezmos y subsistiendo casi sólo de lo que daba el pie de altar⁷⁴. En consecuencia, y siendo el fin fundamental de las rentas de la Iglesia la cura de almas y el sustento de sus pastores, estimaba el obispo que sería muy conveniente revirtiese a Lorca la parte suficiente de los préstamos aplicados fuera para cumplir con los mismos fines. En este caso concreto, proponía que la mitad de su producto (18.000 reales en 10 años) se destinase a vicarios y párrocos, y la otra mitad para las cátedras y sus maestros. Algo más adelante veremos que este expediente no llegó a resolverse.

Junto a estos intentos por incrementar las rentas reintegrando el préstamo de San Clemente, el abad y rector Robles Vives se esforzó en aumentar los estudios del nuevo Colegio a través de otro paso que se nos antoja totalmente lógico dentro de los planteamientos ya analizados que presidieron la actuación de los lorquinos en relación al Colegio. Así, en 21 de agosto de 1790, se solicitó del Consejo la gracia de habilitación de los cursos de filosofía y teología que se realizasen en el Colegio para recibir los grados menores y mayores en cualquier Universidad del Reino⁷⁵. En su representa-

72 Un préstamo y dos beneficios servideros por parroquia, salvo la de Santiago que sólo tenía un beneficio curado.

73 Al folio 37 vto. de los *Diferentes instrumentos...* publicados por el obispo Roxas Contreras (Madrid, 1756) los diezmos de Lorca se dividían originalmente en 70 raciones iguales, que correspondían: 12 al obispo, 12 al cabildo, 14 tercios del rey, 7 terzuelos de parroquias, 1,5 al arcediano de Lorca, 1,5 al Chantre, 1 al arcipreste de Lorca, 2 a los fieles de tercias, y 19 a las parroquias: 1 préstamo y 2 beneficios en las de Santa María, S. Juan, S. Pedro, S. Mateo, S. Cristóbal y S. Patricio, y 1 beneficio curado en Santiago. Según el informe de López Gonzalo, el valor de cada ración se había fijado en los dos últimos decenios en 18.000 reales. Este informe del obispo iba refrendado por certificado de los fieles del granero decimal de Lorca de 11 de febrero de 1787, correspondiente a lo entregado a las parroquias de Lorca entre los años 1776 y 1785, sin bajar los gastos excepto subsidio y excusado. Los 18.000 rs. son un valor medio aproximado de lo rendido (en dicho certificado se expresaba con detalle por parroquia). Sin embargo, otro certificado de los fieles del granero mayor de Lorca de 30 de julio de 1792 indicaba que en el decenio 1781-1790 el valor de la ración había descendido a 16.978 rs. sin baja alguna.

74 Según López, desde 1787 se estaba intentando remediar la situación dotándoles de congrua y erigiendo nuevas parroquias o vicarías, con la aplicación de 8 beneficios.

75 “Lorca, 1790. Expediente formado en virtud de Real Orden de Su Majestad y representación de D. Manuel de Robles Vives, abad de la Colegial de San Patricio de Lorca y Rector del Colegio de la Purísima Concepción nuevamente fundado en aquella ciudad sobre que se habiliten los cursos de filosofía y teología que se tengan en dicho Seminario para recibir los grados menores y mayores en cualquiera Universidad”.

Por sucesivas gracias de 1777, 1781 y 1783, el Seminario de San Fulgencio de Murcia poseía el excepcional privilegio de colación de grados menores (bachiller) como si de cualquier Universidad de tratase. Cf., MAS, C.: “De la Ilustración al liberalismo...”, p. 127. La gracia que ahora solicitaba Robles era idéntica a la concedida al Colegio fulgentino en 1777.

ción, el abad exponía que el Colegio había tenido efecto en 11 de mayo de 1788, abriendo sus puertas con cátedras de gramática, filosofía y teología. Exponía que los frutos alcanzados desde entonces “no son ponderables”, tanto en el servicio al coro y el altar, como en método y autores, idénticos a los del Seminario de San Fulgencio. Como quiera que era necesario poder acceder a los grados de filosofía y teología, y que al de Lorca habría de considerársele como “apéndice o filial” del de San Fulgencio, dedicado especialmente a atender a Lorca y a algunos pueblos del obispado de Almería, y a que dicha gracia ya se concedió al de San Fulgencio en 1777, pedía que a los colegiales que hubiesen cursado y ganado en la Purísima los cursos de filosofía y teología prevenidos para obtener grados de Bachiller o mayores, se les admitiese en las Universidades en el mismo modo que a los de San Fulgencio. Desde el Consejo, sin mayor dificultad, se habilitó a colegiales y porcionistas los cursos de filosofía y teología, pero sólo para el grado menor de Bachiller, incorporándolos a la Universidad de Granada ⁷⁶.

La última referencia que obra en la documentación utilizada, desde el punto de vista cronológico, nos lleva ya al final de la Guerra de Independencia. Se trata de un expediente de 1815 ⁷⁷ abierto a instancias de una representación del ayuntamiento de Lorca solicitando se concediera, por fin, al Colegio de la Purísima el título de Conciliar y que se invirtiesen en él las rentas que salían de Lorca para sostener en Murcia y Cuenca becas de gracia y cátedras de latinidad ⁷⁸. Ello nos revela en primer lugar que los intentos por incorporar el beneficio de San Clemente no dieron fruto. Pero al propio tiempo, pone de manifiesto el deseo de aprovechar la adversa coyuntura por la que el Seminario de Murcia atravesaba en esos momentos. A la altura de 1815, y dada la fama que el Seminario murciano había adquirido en los años anteriores como foco de *jansenismo* y de liberalismo, ese intento sólo puede entenderse plenamente como efectuado desde posiciones ideológicas no ya tradicionales, sino reaccionarias ⁷⁹: lo que los poderes lorquinos habían sembrado (al menos en el terreno de la enseñanza) desde 1779, esperaban recogerlo al regreso del esperpéntico Deseado. Máxime cuando

76 Esta Universidad, reunido su claustro en 18 de enero de 1791, no halló inconveniente en la concesión de la gracia, de forma lógica. *Real Provisión de su Magestad, por la que a consulta del Real y Supremo Consejo de Castilla, se ha servido conceder al Colegio de la Purísima Concepción de la Ciudad de Lorca, Diócesis de Cartagena, la gracia de su incorporación a la Universidad de Granada, y de que a sus Colegiales Vecas o Porcionistas les valgan los Cursos de Filosofía y Teología para obtener los Grados de Bachiller en qualquiera Universidad, como si hubiesen sido ganados en la dicha Granada, matriculándose anualmente todos sus Cursantes con las formalidades acostumbradas, y sujetándose al método de Estudios de ella*. Madrid, Imprenta Real, 1791, Portada más VII fol. (ejemplar en el expediente).

77 “Lorca y Cuenca. 1815. Expediente formado en virtud de Real Orden de Su Majestad con la que se remitió al Consejo para la providencia que estimase, o en caso necesario consulte a Su Majestad su dictamen una representación documentada del Ayuntamiento de Lorca, solicitando que a fin de fomentar el interesante ramo de instrucción pública se conceda al Real Colegio de la Purísima Concepción el título de Seminario Conciliar, y que se inviertan en él las rentas que salen de Lorca para sostener en Murcia y Cuenca becas de gracia y cátedras de latinidad”.

78 Las rentas pagadas en Murcia eran las de las becas destinadas a los lorquinos en el Seminario de San Fulgencio, a las que ya nos referimos.

79 En ese mismo año, por orden de Fernando VII de 15 de marzo, el Seminario de San Fulgencio fue sometido a una exhaustiva *visita* de depuración ideológica y política: el gran momento para el desquite ante el rey de todos aquellos que en Murcia se habían opuesto a sus reformas desde 1774. Cf. MAS C.: “De la Ilustración al liberalismo...”, pp. 165-166.

a la vista estaban (en el Seminario de San Fulgencio) cuáles podían ser las funestísimas consecuencias de las ideas ilustradas.

En dicha representación, hecha el 31 de enero de 1815 —a propuesta del síndico general del ayuntamiento— se solicitaba también la institución de una cátedra de cánones al igual que existía en Murcia⁸⁰. Y, dato importante, daba a entender que el Colegio había estado cerrado durante los tiempos de la guerra, pues se pedía se “restituía el Colegio con cátedras de Filosofía, Teología y Cánones”.

Tampoco este expediente, en la difícil coyuntura de esos años, llegó a progresar. Aún en 1819 se recordaba al obispo, D. José Ximénez, su obligación de informar, cosa que no hizo hasta el 11 de noviembre de ese año. Ximénez expuso que efectivamente el Seminario de Murcia gozaba de una porción de las 70 decimales de Lorca. Ahora bien, el diezmo era tributo de Dios y no objeto para manejo de los ayuntamientos, siendo su aplicación al Seminario prioritaria por las mandas conciliares: ¿qué ocurriría —se preguntaba el obispo— si, desde una visión tan estrechamente localista, hiciesen lo mismo los demás pueblos que a través de los diezmos pagaban becas en el Seminario de Murcia? Tampoco era favorable D. José a que se formase Seminario Conciliar, pues ya se erigió a condición de que no lo fuese. Si ahora se hiciera, tendría que sujetarse en todo al de Murcia, según entendía el decreto *proseminariis*, y desde luego el ayuntamiento no podría tener ninguna intervención. Finalmente, sí estimaba “prudente” lo solicitado en relación al beneficio percibido en Cuenca, y pedía se formase expediente aparte. Pero aun así, era partidario de que no se hablase del asunto sin profundo conocimiento de causa.

La postura del obispo Ximénez merece una explicación, sobre todo por ser bien conocida su mentalidad conservadora. Aunque ella le alinease ideológicamente en posiciones semejantes a las que podían animar a los lorquinos e hiciese de él un hombre bienquisto en las esferas gubernamentales, siempre se mostró celoso de sus prerrogativas, protegiendo en la medida de lo posible al Seminario fulgentino del proceso de depuración al que se vio sometido entre 1814 y 1820⁸¹. Era una posición que, por encima de matices ideológicos concretos, le unía a todos sus predecesores setecentistas en la mitra de Cartagena. Ahí residió, a buen seguro, la clave de la postura que adoptó ante la nueva petición salida de Lorca.

El informe del fiscal del Consejo, fechado el 9 de febrero de 1820, le daba la razón en todo, y en cuanto al Colegio, estaba pendiente de recibir otro informe del obispo sobre la posibilidad de establecer una cátedra de jurisprudencia. Entre tanto, recomendaba que los canónigos Lectoral, Magistral y Doctoral explicasen ambos Derechos, aunque ciertamente las rentas —en tan adversos años— no lo permitían.

El 9 de abril de 1820, el gobierno constitucional recogería el expediente sin despachar.

80 Estamos ante un evidente falseamiento interesado de la verdad, pues las cátedras de ambos derechos habían sido suprimidas en San Fulgencio desde 1807. MAS, C.: “De la Ilustración al liberalismo...”, p. 160.

81 Sobre la mentalidad y la actuación del obispo Ximénez en relación al Seminario de San Fulgencio, *vid.* MAS, C.: “De la Ilustración al liberalismo...”, pp. 161-166.